

SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES VASCOS

RAFA AJANGIZ & IÑAKI BARCENA

Introducción

¿Quiénes son los movimientos sociales? O mejor dicho, ¿qué son los movimientos sociales? Es obligatorio plantearse esta pregunta antes de comenzar a escribir sobre los movimientos sociales de Euskal Herria, pues el resultado final estará determinado por la definición que hagamos de nuestro objeto de estudio. Trataremos de los movimientos sociales contemporáneos, es decir, de ese conjunto de movimientos y movilizaciones sociales que se han hecho un hueco en nuestras sociedades posindustriales en los últimos treinta o cuarenta años. Pero, ¿por qué esta selección? ¿no nos estaremos olvidando de algunos otros que sean tan o más importantes que los aquí tratados?

Los procesos de modernización que han experimentado las sociedades postindustriales en la última mitad del siglo XX han traído consigo importantes tensiones estructurales que han hecho visibles los límites del sistema social y las condiciones de supervivencia de la humanidad. La destrucción de la biosfera, los conflictos armados, las desigualdades sociales de todo tipo hunden sus raíces en la mercantilización extrema que gobierna nuestro mundo. Las personas, los grupos humanos, se enfrentan a un cambio acelerado que cuestiona y amenaza sus modos de vida, sus identidades y sus proyectos de futuro. Hay razones para movilizarse. Por suerte, esa misma modernización ha mejorado las posibilidades y capacidades de las gentes, sobre todo los más jóvenes, para hacerlo. De ahí la emergencia de nuevos movimientos sociales y, con ellos, de idearios y prácticas políticas, sociales y culturales que plantean alternativas a la realidad existente.

Se han propuesto numerosas definiciones buscando establecer las líneas divisorias entre los movimientos sociales y otros actores e instituciones políticas. Empezando por una generalista y extensiva, resultaría suficiente para la consideración de movimiento social la existencia de una concreta actividad en un conflicto social o político, la interacción informal en red de varios y diferentes actores y la presencia de una identidad colectiva compartida (Diani, 1992). Otra más precisa sería la que define a un movimiento social como un agente colectivo movilizador, que busca provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello con cierta continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción y organización variables (Raschke, 1994). Y, por fin, de manera más prolija podríamos presentarlo como una red de interacciones informales entre individuos, grupos y/o organizaciones que, en sostenida y

habitualmente conflictiva interacción con autoridades políticas, élites y oponentes —y compartiendo una identidad colectiva— demandan públicamente cambios en el ejercicio o redistribución del poder a favor de intereses colectivos (Ibarra y Letamendía, 2000).

Estas definiciones pueden parecer un poco abstractas, pero concretar más sería reductivo, dejaría cosas fuera. Los primeros estudios y análisis sobre estos movimientos sociales eran mucho más categóricos e insistían en la novedad de estos movimientos sociales en relación a los *viejos* movimientos, fundamentalmente el movimiento obrero: nuevas formas organizativas, de acción, nuevos idearios... Sin embargo, el tiempo y la constatación de que estos movimientos sociales no son una realidad uniforme han ido matizando aquellas primeras conclusiones. Sus formas organizativas pueden ser absolutamente horizontales y democráticas pero también aproximarse mucho a las de una estructura social o política tradicional. Pueden practicar la acción directa no violenta y la desobediencia civil pero también hacer pasillos y recorrer despachos a la manera del más típico grupo de interés. Pueden plantear demandas expresivas, en defensa de una identidad o estilo de vida, y también demandas instrumentales, centradas en el cambio social y político, en la acción del gobierno y las políticas públicas. Y aunque lo más habitual es que tengan un ideario o programa emancipador, puede darse perfectamente el caso de que sea un movimiento de resistencia al cambio político, social o cultural, por ejemplo los movimientos tradicionalistas o neofascistas. O ser un contramovimiento, es decir, un movimiento que se moviliza contra otro movimiento, como el caso del movimiento antiabortista frente a la demanda de libre elección que plantea el movimiento de mujeres. Y para complicar aún más las cosas, pueden mezclar todas estas variables en grados o gradientes diversos. En definitiva, esta diversidad y pluralidad desdibuja las diferencias entre viejos y nuevos movimientos sociales y también complica su distinción de otros actores políticos tradicionales como los partidos o los grupos de interés. Y tiene una ventaja: permite establecer un único marco de análisis para todo lo que es acción colectiva.

En cualquier caso, podemos concluir que, cuando hacemos referencia a un movimiento social, estamos hablando de (a) redes sociales, (b) que oponen un alternativo contenido o significado cultural, social y político, (c) que comparten rasgos institucionales y anti-institucionales, y (d) con una gran variabilidad espacial y temporal. Los movimientos sociales, como cualquier otra realidad social, cambian, evolucionan y se transforman con el tiempo; nacen, crecen, se debilitan y mueren a imagen y semejanza del ser humano, pero en su conjunto se han instalado definitivamente entre nosotros. A pesar de su variedad, muy posiblemente el rasgo que mejor les define es su carácter de protesta, de conflicto, de reivindicación, su voluntad de participar, con otras formas y estilos, en la vida cultural, social y política que nos construye como sociedad y como humanidad. La suya, eso que algunos han llamado *contentious politics*, es otra forma de hacer política, pero, en cualquier

caso, una forma de hacer política tan legítima como la de los partidos u otros actores políticos. Quizá más, porque profundiza la democracia representativa mediante el ejercicio de la democracia participativa.

El estudio de los movimientos sociales

El término *movimiento social* aparece por primera vez en el siglo XIX para referirse al movimiento obrero. El auge de aquel movimiento hizo que la entonces embrionaria escuela sociológica (Marx, Weber, Durkheim) comenzara a elaborar conceptos con el fin de describir y explicar aquellas “novedosas” formas de acción colectiva, haciendo de la lucha entre clases sociales el principal paradigma teórico de análisis. Este paradigma ha perdurado hasta hoy, encarnado por quienes entienden que los llamados *nuevos movimientos sociales* (pacifista, feminista, ecologista...) constituyen un nuevo sujeto histórico que actualiza el programa emancipatorio del *yaviejo* movimiento obrero (Offe, 1988).

Esa identificación se rompió cuando, sobre todo a partir de los años treinta, entraron en juego los movimientos totalitaristas y se produjeron además importantes sacudidas sociales en casi todos los países hegemónicos. Desde Estados Unidos llegó entonces la teoría de la *sociedad de masas*, que se esforzaba por comprender porqué y cómo se producían las revueltas sociales y cómo se había gestado el movimiento fascista en el seno de aquellas sociedades industriales y democráticas, porqué esa pérdida de la racionalidad. La vertiente estructural de esta teoría hablaba de masas alienadas y la vertiente psicológica de anomía o comportamiento social desviado. Con el tiempo, se empezó a identificar una cierta racionalidad en esa acción colectiva y ese primer paradigma dio paso a otras dos teorías: la teoría del *comportamiento colectivo* (Smelser, 1989; Turner y Killian, 1957, original de 1962) y la teoría de la *elección racional* (Olson, 1992, original de 1965).

La primera de estas teorías entendía la movilización social como el producto de las tensiones sociales que se producen cuando los grupos sociales ven frustradas sus expectativas, bien materiales o bien culturales. Con todo, había un abismo difícil de superar entre las organizaciones formales y los movimientos sociales, porque estos carecían de estructuras o estrategias estables y sus acciones eran básicamente expresivas, nada instrumentales. La segunda (actualmente representada por Elster, (1991) explicaba — explica aún— la participación de los individuos en un movimiento social desde una óptica instrumental o utilitarista: el individuo se movilizará sólo si los beneficios esperados (fundamentalmente “materiales” pero también “sociales”) superan a los costes que esa acción le supone. Así pues, la diferencia esencial entre una y otra teoría es el sujeto de esa racionalidad, el grupo o sector social en el primer caso y el individuo en el segundo. Sin embargo, el tiempo no las ha tratado igual: mientras la teoría del comportamiento colectivo

es hoy un referente lejano, la teoría de la elección racional ha terminado creando verdadera escuela y convirtiéndose en un referente habitual en la actualidad, incluso para explicar los movimientos sociales. Ello ha suscitado no pocas polémicas con los académicos que utilizan paradigmas más específicos como los que veremos más adelante .

Las décadas de los sesenta y setenta se erigieron en otro hito histórico en la evolución de los enfoques en el estudio de los movimientos sociales. La emergencia de lo que parecían nuevos idearios (feminismo, ecologismo, pacifismo, nuevas identidades alternativas...) en relación con el preexistente movimiento obrero o los movimientos nacionalistas y también la certidumbre de que esta acción colectiva estaba encarnada por actores políticos racionales, capaces de organizarse y diseñar estrategias de cambio social y político, impulsa un replanteamiento radical de los paradigmas existentes. Este replanteamiento se organiza en dos corrientes: la europea y la americana; la europea se centra en el *porqué* de estos movimientos sociales contemporáneos y la americana en el *cómo* se organizan y movilizan.

A este lado del Atlántico, lo que más llama la atención es, sin lugar a dudas, su novedad: nuevas culturas, nuevas identidades, nuevas formas, nuevos sujetos y actores; de ahí lo de *nuevos movimientos sociales*. Esta novedad lleva a preguntarse por las razones de la aparición en escena de esos movimientos: el profundo cambio de valores que deriva del acceso generalizado a la educación y la extensión del estado de bienestar (Inglehart, 1991) y también la crisis de legitimidad que afecta a ese mismo Estado del Bienestar o la constatación de que la democracia representativa se revela incompetente e insuficiente para producir nuevos consensos a tono con esos valores (Offe, 1988).

Pero también interesa, y mucho, descifrar quiénes son y qué aportan estos movimientos. Por ejemplo, desde un enfoque más estructuralista, Touraine (1981) describe a estos nuevos actores o movimientos sociales como elaboradores de nuevas formas de producción cultural y material y, en definitiva, como sujetos de una nueva reflexividad cultural. Para los marxistas en general, los nuevos movimientos sociales son los agentes de transformación social de las sociedades industriales avanzadas o postindustriales, los sucesores naturales de un movimiento obrero en transformación. Desde una óptica cognitiva, Melucci (1989), los presenta como nuevos espacios socioculturales que interpretan la realidad, construyen identidades colectivas diferenciadas y desarrollan una acción colectiva basada en la solidaridad para romper los límites del sistema y cambiar las cosas.

Mientras, en Estados Unidos, las nuevas movilizaciones se estudian desde la lógica racional/instrumental dominante, dando lugar a la *teoría de movilización de recursos* (Gamson, 1990; Zald y McCarthy, 1987, primera edición de 1975). Es una teoría que se centra en las organizaciones de los movimientos sociales para hacer ver, en última instancia, que los movimientos no son esas espontáneas manifestaciones de protesta sin objetivo

definido que describía la teoría del comportamiento colectivo sino unos actores políticos perfectamente legítimos y racionales, con meditados fines y estrategias de acción y cuya eficacia depende, como cualquier otra organización política, de su capacidad para reunir y utilizar recursos suficientes. Esta teoría estuvo muy influida, sobre todo en sus comienzos, por la teoría de la elección racional y prestaba una especial atención a los incentivos (materiales y sociales), ese recurso necesario para convocar, movilizar y sostener la participación en la acción colectiva de unos individuos básicamente regidos por cálculos utilitaristas de costes y beneficios. Posiblemente, haya sido el enfoque cognitivo, con su grandes aportaciones en relación con el análisis del discurso (Eder, 1996; Eyerman y Jamison, 1991; Gamson, 1992; Klandermans, 1997; Snow, Rochford, Worden *et al.*, 1986), es decir, de las propuestas y estrategias de interpretación de la realidad y justificación de la acción colectiva que despliegan las organizaciones, el que más ha contribuido a superar las deficiencias de la elección racional en este contexto.

En Estados Unidos también se desarrolla otro paradigma que resulta de alguna manera complementario con el anterior. Nos referimos a los analistas del *proceso político* (McAdam, 1982; Tilly, 1978), que estudian los contextos macropolíticos así como las estructuras institucionales y las pautas de interacción entre los actores políticos que condicionan toda movilización, prestando una especial atención a aquellos factores y circunstancias que crean oportunidades para la acción colectiva. Una de las expresiones más clásicas de este enfoque son los *ciclos de movilización*.

Pero, sin duda, la propuesta analítica de mayor alcance ha sido la *estructura de oportunidad política*. Por estructura de oportunidad política se entiende el contexto político en el que se desenvuelve un movimiento social concreto, operacionalizado como la combinación particular de elementos estructurales como, por ejemplo, el grado de centralización de un Estado, la concentración del poder político, la existencia o no de mecanismos de acceso a ese poder, el tipo de respuesta dominante ante la acción colectiva, y de elementos coyunturales como la disponibilidad de aliados, la existencia de un gobierno de coalición inestable o de disputas entre las élites, etc. Tarrow (1997) en Estados Unidos y Kriesi (1992) en Europa serían dos de sus más destacados representantes.

No obstante, en un mundo tan comunicado como este, era del todo imposible preservar esa separación analítica, más aún cuando, en el fondo, los enfoques eran más bien complementarios. Así, a mediados de los ochenta ambas corrientes se encuentran y dan lugar a un mestizaje de gran creatividad propositiva que ha seguido profundizándose hasta el presente. Hoy, es difícil distinguir escuelas puras y lo que prevalece son propuestas teóricas y metodológicas tan válidas como poco excluyentes. Algunas de ellas, muy significadamente los *marcos de acción colectiva* y la *estructura de oportunidad política*, se han convertido en referencias comunes en otros campos de la sociología y la ciencia

política. En cualquier caso se podría decir que, hoy en día, el marco teórico habitual en el estudio de los movimientos sociales es el que resulta de la combinación de varios de los enfoques y propuestas reseñados.

El lector interesado puede acudir a numerosos textos y estudios de investigación al respecto. Aunque muy reciente, pues se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos quince años, existe una amplia bibliografía sobre movimientos sociales. Se han estudiado en detalle prácticamente todas las grandes movilizaciones habidas en el último medio siglo y abundan los estudios comparativos. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las publicaciones al respecto están en otros idiomas, sobre todo en inglés; son pocas las traducidas al castellano y prácticamente ninguna al euskera. A continuación mencionamos algunas referencias que son de interés.

Algunas obras de señalados autores extranjeros han sido traducidas al castellano o incluidas en libros colectivos. Es el caso de Beck (1998), Castells (1998), Dalton (1992), Frankel (1989), Ibarra y Tejerina (1998), Inglehart (1991), Laraña y Gusfield (1994), McAdam, McCarthy y Zald (1999), Randle (1998), Tarrow (1997), Touraine (1990) o los números 54/55, 56 y 69 de la revista *Zona Abierta*. Resúmenes del estado de la cuestión realizados en castellano y obras originales de autores peninsulares son Casquette (1998), Durán Muñoz (1995), García de la Cruz (1990), Guillem (1994), Ibarra (1995), Ibarra (2000), Laraña (1999), Riechmann (1991), Riechmann y Fernández Buey (1994), Sacristán (1987), Valencia (1997), Zubero (1996), Zubero, Corretja, Mardones *et al.* (1996).

En el terreno de los análisis aplicados al Estado español contamos con Agirre, Ajangiz, Ibarra *et al.* (1998), Alberich (1993), Alonso (1991), Calle (2000), Castells (1986), Grau y Ibarra (2000), Ibarra (1992), Pastor (1991), Pindado (2000), Rodríguez Villasante (1984), Sampedro (1997) y merece la pena revisar publicaciones periódicas como *Documentación Social*, *En Pie de Paz*, *Papeles para la Paz*, *Mientras Tanto*, entre otras. En el caso específico de Euskal Herria cabe citar Ajangiz, Manzanos y Pascual (1991), Andres (1980), Arrizabalaga (1997), Bárcena, Ibarra y Zubiaga (1995), Barriocanal y Zaldua (1997), Funes Rivas (1998), Joxemi Zumalabe Fundazioa (1999), Murguialday, Río, Anitua *et al.* (2000). Tejerina, Fernández y Aierdi (1995), Urrutia (1985) y los números 127 y 133 de la revista *Herria* 2000 Eliza. No es esta una relación exhaustiva ni mucho menos y pedimos perdón por las omisiones a que haya lugar.

No podemos acabar este apartado sin dejar constancia de una chocante paradoja que afecta a la investigación sobre movimientos sociales. Aunque producir cambio social y político es la razón de ser nominal de los movimientos sociales, sociólogos, politólogos y psicólogos sociales han preferido desentramar los porqués y los cómo de los movimientos

sociales y apenas han prestado atención a los efectos de su movilización, a las consecuencias de esa acción colectiva.

Observamos que la referencia al cambio social es el eje central de la mayoría de las definiciones, tanto clásicas como contemporáneas, unos declarando a los movimientos sociales como agentes históricos transformadores de la vida política, y otros llegando decir que quizás sean las fuerzas de cambio más potentes de nuestra sociedad (Sztompka, 1995:303). Según este último autor, los cambios originados por los movimientos sociales pueden darse en cuatro niveles o estructuras, a saber: (a) en las concepciones e interpretaciones ideológicas y discursivas de la realidad, esto es en la estructura ideal; (b) en la adopción de nuevas normas sociales y valores, reglas de conducta y formas de vida, lo que afecta a la estructura normativa; (c) en la creación de nuevos grupos, redes, coaliciones y actores socio-políticos, actuando sobre la estructura política; y finalmente, (d) sobre la estructura de oportunidad o proceso político, generando la distribución de bienes o ganancias sustanciales. A su juicio, un movimiento social empieza a producir cambios desde su propia morfogénesis interna y logrará su potencial dinámico sólo si estos cuatro dominios de la estructura social son atacados con eficiencia.

Sin embargo, las dificultades metodológicas —por ejemplo, la existencia de muchos actores políticos interactuando sobre una misma realidad, la imposibilidad de establecer cadenas causales en el campo de las ciencias sociales, la existencia de complejas tensiones estructurales, etc.— hacen muy difícil, si no imposible, establecer vínculos directos entre la acción de un movimiento social y los cambios sociales y políticos que se observan a continuación (Giugni, 1998; Rucht, 1992). Con todo, en los últimos tiempos, empiezan a darse interesantes aportaciones al respecto a partir de un diseño metodológico longitudinal y comparativo a la vez (Ajangiz, 2001; Giugni, McAdam y Tilly, 1999; Midttun y Rucht, 1994; Rucht, 2000).

En nuestro caso, como perspectiva analítica y metodológica, nos parece interesante deambular por los caminos del cambio social para preguntarnos, sobre el impacto, los éxitos y fracasos, las consecuencias y los cambios sociales, deseados o no, que los movimientos sociales han producido en Euskal Herria en el último cuarto del siglo recientemente acabado. A falta de un *corpus* suficiente de estudios al respecto, propondremos a continuación algunas reflexiones e invitamos desde aquí al lector para que, a modo de investigación participativa, aventure sus propias conclusiones.

A modo de guía, cuatro podrían ser los grandes ejes o contenidos que se pueden considerar en el análisis de un movimiento social y que determinan las consecuencias de su acción: (a) las estructuras y formas organizativas (entre redes de organizaciones y dentro de cada organización) o estructuras de movilización, (b) el discurso o *marcos de acción*

colectiva y su papel en la construcción interna de la movilización y también en su legitimación ante la sociedad, (c) la estructura de oportunidad política, incluidos los sistemas de alianzas (actores políticos afines) y de conflicto (adversarios o antagonistas), y (d) las estrategias y modos de acción preferentes. Debemos advertir, con todo, que no existen formas organizativas, discursos, alianzas o estrategias de acción preferentes o mejores que las demás, sino tan sólo opciones mejor o peor ajustadas al objetivo y al contexto de la concreta movilización. Aprender de los aciertos y errores pasados es, en este sentido, el más grande reto que tienen quienes construyen las movilizaciones sociales del mañana.

La realidad de Euskal Herria

Para empezar, la relevancia cualitativa y cuantitativa del activismo social vasco es un dato a tener en cuenta. Existen muy pocos estudios comparativos entre movimientos de diferentes países que incluyan a Euskal Herria —una excepción al respecto es, sin duda, el proyecto de investigación europeo TEA (The Transformation of Environmental Activism: <http://www.ukc.ac.uk/sociology/TEA.html>), que analiza y compara las protestas ecologistas, sus organizaciones y campañas entre 1987 y 1998 en 7 países europeos—, pero algunos índices indirectos como los que evalúan el capital social sitúan a nuestro país en el primer puesto de la clasificación estatal (Mota y Subirats, 2000) y, en cualquier caso, por simple comparación apriorística con las comunidades políticas cercanas a la nuestra, no es difícil apreciar que Euskal Herria es un hervidero de grupos, asociaciones y organizaciones sociales de todo tipo. El antimilitarismo, el ecologismo, el feminismo, la solidaridad internacional, el euskera, la juventud, los derechos humanos, la salud, la sexualidad, el tiempo libre, la educación, la comunicación, la cultura, el deporte, etc. componen ámbitos muy plurales y dan lugar a frecuentes movilizaciones y protestas que inciden sobre la sociedad y el sistema político vascos (Joxemi Zumalabe Fundazioa, 1999).

Una explicación plausible a esta mayor intensidad movilizatoria —algunos autores calificarían de buen grado a nuestro país como una sociedad de movimientos sociales (Meyer y Tarrow, 1998)— es la preponderancia del conflicto en las esferas cultural, social y, muy obviamente, política que definen nuestro país. Mientras otros países conocen una mayor *normalidad* —deseable en algunos aspectos, pero también alienadora; es difícil hallar un punto medio—, la no resolución de conflictos muy enraizados alimenta aquí una dinámica de movilización constante.

Gráfico 1. Dinámica de la movilización social

El siguiente gráfico, que hemos elaborado a partir de una propuesta original de Rucht (Rucht, 2000), nos puede ayudar a comprender la dinámica de la movilización social en Euskal Herria: sus determinantes contextuales, las estructuras organizativas y estrategias que adoptan los movimientos, así como los resultados de sus protestas y mediaciones políticas. Como se puede observar, para producir cambio cultural, social y político, los movimientos sociales suelen dirigirse en última instancia sobre quienes tienen capacidad para promover dicho cambio, pero lo hacen valiéndose de mediaciones de todo tipo: partidos políticos, grupos de presión e interés, creando opinión pública y modificando las actitudes y comportamientos individuales. Obviamente, no inventan sus demandas, sino que las construyen a partir de los problemas existentes en el medio. Y muy evidentemente también, sus estructuras y opciones no dependen sólo del marco político en el que se mueven, sino también del contexto socio-cultural en el que se inscriben, de los vínculos y difusión entre movimientos y otros actores intervinientes, así como de los resultados y éxitos obtenidos.

Coincidimos con Rucht en que casi todas las investigaciones sobre movimientos sociales, tanto las que adoptan el marco analítico de la estructura de la oportunidad política, como las que se enmarcan en la teoría de movilización de recursos, han obviado por lo general las dimensiones cultural y social del contexto estructural en el que tales movimientos se desenvuelven. El juego entre actores políticos no lo es todo. Y en el caso vasco nos parece de mucha ayuda aprehender las bases estructurales sobre las que se ejerce la movilización para entender el devenir y el cambio socio-político aportado por los movimientos sociales vascos.

La potencia del nacionalismo vasco y sus redes sociales, la industrialización del Gran Bilbao y la masiva recepción de emigrantes, así como la posterior reconversión industrial, la coexistencia del euskera con el castellano y el francés, la pequeñez del territorio vasco y su gran diversidad de climas y paisajes, la fuerte idiosincrasia de sus pueblos y comarcas y, en general, la distancia cultural y social que existe entre el mundo rural y agrícola de un lado y el simbiótico ambiente burgués/proletario de las capitales vascas, de sus ciudades y barrios periféricos de otro, son algunos datos que añadidos a los propiamente políticos ayudan a entender el cómo y el porqué de la intensa dinámica de movilización social que caracteriza a Euskal Herria.

A diferencia de otros países europeos, cuando al final de los años 60 los movimientos estudiantiles y la llamada "nueva izquierda" lanzan sus proclamas antiimperialistas y rechazan el modelo de crecimiento económico y bienestar material, apostando por la democracia de base, la igualdad entre los sexos y la no discriminación social ni racial, el pacifismo, la no violencia y el ecologismo frente a la energía nuclear, al militarismo, la burocracia estalinista y la guerra fría, en Euskal Herria el contexto político, social y cultural

estaba dominado por el enfrentamiento con la dictadura franquista. Incluso en Iparralde donde, más que las movilizaciones de Mayo del 68, eran la solidaridad y las campañas de apoyo a refugiados y represaliados por la dictadura española las que dominaban la escena política. La lucha por la recuperación de la democracia no impidió el nacimiento de los nuevos movimientos sociales en Euskal Herria —feminismo, ecologismo, antimilitarismo— pero sin duda condicionó sus contenidos, estrategias e impactos al menos en esos primeros años.

Dos son los movimientos que mejor representan el rechazo vasco al sojuzgamiento centralista, a la uniformidad lingüística, a la falta de libertades democráticas y a la represión. El movimiento obrero industrial y sus organizaciones políticas y sindicales y el movimiento abertzale o de liberación nacional vasco son los dos pilares sobre los que se asienta el movimiento de rechazo a Franco, el más importante sin duda de todo el Estado español. Además, en este período previo a la reforma política española, nos encontramos con dos movimientos sociales de especial relevancia, el movimiento estudiantil y el movimiento vecinal o ciudadano. Ambos con un marcado discurso político antifranquista y ligados a las organizaciones nacionalistas y de izquierdas que desde los institutos y la universidad o desde los barrios y pueblos periféricos a los centros industriales desarrollan reivindicaciones democráticas, participativas y de mejora de la calidad de vida urbana.

Así, desde el Proceso de Burgos (1970), por el que se condena a muerte a varios activistas de ETA, hasta la amnistía general de 1977 se produce un álgido período de movilizaciones y protesta social, de huelgas y manifestaciones *in crescendo*, en el que el amplio espectro de organizaciones participantes, a pesar de su variedad ideológica y de contar con marcadas diferencias tanto en objetivos como en estrategias, apuesta por la "unidad de acción" como mejor camino para asegurar la caída del régimen.

El modo en que se desarrolla la transición española frustra muchas de las expectativas creadas. El pacto entre élites abortó las posibilidades de una ruptura democrática y propició una reforma pactada que integró a los responsables del régimen franquista en las nuevas estructuras. Los Pactos de la Moncloa dieron paso a una monarquía constitucional y a un Estado autonómico que conformaron una nueva estructura de oportunidad política, donde el alto grado de insatisfacción política, económica y cultural se reflejó en el rechazo vasco a la Constitución española, en la persistencia de un alto grado de movilización obrera y en la persistencia de las demandas culturales y lingüísticas.

Tras la Reforma, comienzan a darse crecientes niveles de desmovilización social, siempre en relación con los niveles de movilización precedentes. Por ejemplo, el movimiento vecinal sufre una grave crisis tras las elecciones municipales de 1979, producto de la incorporación de sus líderes a los partidos políticos de la izquierda y, sin solución de

continuidad, a puestos de gestión municipales o representación institucional. Es también en este momento, por su progresiva “domesticación”, seguidismo e integración en las instituciones representativas, cuando se manifiesta claramente la incapacidad del movimiento obrero y sindical (CCOO y UGT) y de los partidos políticos de la izquierda tradicional (PSOE y PCE) para dar respuesta a las demandas de género, de identidad nacional, de desmilitarización, de calidad de vida o de respeto a los ecosistemas (Alabart, 1998:144).

Así, los últimos setenta y primeros ochenta conocen una mayor visibilidad de los nuevos movimientos sociales, antes agazapados o incorporados a la lucha dominante por la recuperación de la democracia. Este hecho ha popularizado la afirmación de que los nuevos movimientos sociales del Estado español se caracterizan por “una aparición tardía y una crisis prematura” y esto debido, entre otros factores, a la especial transición del franquismo a un Estado del Bienestar débil, a la dominancia del neocorporativismo de partidos y grupos de interés rápidamente profesionalizados y a la preexistencia de una cultura mayoritariamente materialista y poco participativa (ver, por ejemplo, Pastor, 1998:73). Cabrían muchas matizaciones al respecto, pues el Estado español ha conocido importantes movilizaciones feministas, ecologistas, pacifistas y antimilitaristas desde los años setenta, algunas de ellas bastante más longevas que sus iguales en otros países europeos.

En cualquier caso, podemos destacar dos diferencias en la formulación de estos nuevos movimientos sociales en Euskal Herria en comparación con el resto del Estado. Una, su mayor capacidad organizativa, intensidad movilizatoria, e incidencia cultural, social y política. Y dos, la persistencia de la movilización social centrada en la búsqueda de la soberanía nacional, de autodeterminación de la comunidad vasca. Este hecho sin duda impulsa un mayor contexto global de movilización en el terreno de los nuevos movimientos sociales, pero también condiciona seriamente sus posibilidades de acción y la especificidad y autonomía de sus propuestas. De hecho, un buena parte de la izquierda nacionalista vasca prefiere hablar de “herri mugimenduak” en vez de “gizarte mugimenduak”.

A continuación pasamos a analizar algunos de los movimientos sociales vascos que consideramos de mayor relevancia por sus cotas movilizadoras, por los cambios sociales, culturales y políticos que han propiciado, y porque encajan mejor en la definición dominante de movimientos sociales contemporáneos. Nos referimos al movimiento en favor de la recuperación del euskera y de la cultura vasca, al movimiento de mujeres, al movimiento antinuclear y ecologista, al movimiento por la paz y antimilitarista, y al movimiento de solidaridad con otros pueblos. No pretende ser un recorrido exhaustivo, ni mucho menos. De hecho, no sin pesar, hemos pasado por alto, entre otros, el movimiento de libertad sexual y el movimiento autónomo —okupas, gaztetxes y radios libres—; una referencia en relación con este último es Arrizabalaga (1997)- o el novísimo movimiento

contra la globalización (Hemen eta Munduan, ATTAC,...). Además, por razones obvias, al ser más políticos que sociales y porque se sitúan más cerca de otras categorías de actores políticos como los partidos, los sindicatos o los grupos de presión, más aún en Euskal Herria donde se agrupan en familias políticas, también hemos dejado fuera de esta breve relación a los movimientos nacionalistas, sindicales, estudiantiles y antirrepresivos.

El movimiento en favor del euskara y la cultura vasca

No es propiamente un movimiento nuevo o joven. Desde la publicación del “Linguae Vasconum Primitiae” de Bernart Etxepare en 1545, la defensa de la lengua y cultura vascas ha conocido numerosas experiencias cíclicas. Empero, es con el nacimiento del nacionalismo vasco a finales del siglo XIX cuando se incentivan de manera notable las reivindicaciones en favor de la lengua vasca. El euskara se convierte así en uno de los signos distintivos de la etnicidad vasca y, en lo político, en uno de los fundamentos objetivos de la identidad colectiva diferencial del pueblo vasco.

Durante casi cuatro décadas, la represión del franquismo supuso la desaparición de la escena y actividad pública de la lengua vasca, entendida por el régimen como símbolo separatista. La escuela, la calle, la administración e incluso la iglesia dejaron de ser lugares de uso para el euskara, que tuvo que cobijarse en el ámbito familiar, rural y tabernario. Hasta 1949 no se publica, pasada previa censura, el primer libro en euskara desde la Guerra Civil. Sin embargo ya desde los años sesenta se empieza a vertebrar un movimiento social, en aquellos momentos clandestino, cuyos objetivos eran la unificación y normalización del euskara, la puesta en marcha de la escuela vasca —ikastola—, la alfabetización de los vascoparlantes y la enseñanza del euskara a los adultos no parlantes, así como su introducción en todos los ámbitos de la cultura vasca, desde las artes y el deporte hasta la música y la literatura, pasando por la universidad, la empresa o la administración.

Este amplio espectro de metas, objetivos y direcciones hacen que el movimiento social en favor del euskara y de la cultura vasca sea sin duda el más plural, amplio y diverso de cuantos nos disponemos a comentar. En él se involucran, por citar sólo algunos casos, organizaciones nacionales vascas de amplio espectro como Ikastolen Elkarte, Udako Euskal Unibertsitatea —nacida en 1973— o la organización para la euskaldunización de adultos AEK; revistas y diarios como Argia o Euskaldunon Egunkaria, o los más de 30 grupos y revistas locales que se reúnen en Topagunea; institutos lingüísticos-científicos como UZEI o Elhuyar, asociaciones sectoriales como la Junta de Euskara del Colegio de Abogados de Bizkaia, o decenas de iniciativas locales como Arrasate Euskaldundu Dezagun.

Haciendo un esfuerzo por ordenar los ingredientes de esta voluminosa ensalada, P. Agirrebaltzategi nos ofrece dos clasificaciones. La primera (Agirrebaltzategi, 1995), atendiendo al tipo de recursos y forma de organización, distingue entre organizaciones técnico-empresariales (Elhuyar, UZEI, Argia, Egunkaria, Siadeco,...), profesional-sindicales (asociación de escritores, traductores, actores,...) y organizaciones populares-militantes (AEK, EHE, ikastolas,...). Y la segunda (Agirrebaltzategi, 1999:60) clasifica este universo en tres grupos en función de su perspectiva u orientación de trabajo:

- (a) Las organizaciones de perspectiva u orientación político-institucional, esto es, aquellos grupos que se han organizado para reclamar de las instituciones públicas su responsabilidad para con la normalización lingüística.
- (b) Las organizaciones de perspectiva antropológico-comunitaria que, dejando en un segundo plano al poder y a las instituciones políticas, actúan sobre la comunidad vasco parlante, buscando su potenciación, ampliación y reforzamiento.
- (c) Y las organizaciones de dimensión sociológico-dialéctica, que serían aquellas que se dedican a la coordinación y planificación del trabajo de recuperación lingüística a caballo entre las asociaciones y las instituciones.

Existe otra taxonomía dual, quizás más expresiva, que divide a las organizaciones para la lengua vasca según su estrategia cultural o de poder (Agote, 1995:86). Por un lado, estarían aquellos grupos que, basándose en la cotidianeidad, tratan de estructurar y potenciar la comunidad vascofona sin reparar en las interferencias y disputas entre los partidos políticos. Sus propuestas son pragmáticas, positivas y realistas, tratando de alcanzar metas progresivas. Por el otro, estarían los grupos que, agregados a una estrategia de poder, han centrado sus críticas en la política lingüística oficial, han contrapuesto el monolingüismo al bilingüismo e incidido normalmente en los sectores de la enseñanza y la administración desde una posición reivindicativa. La presión social, la denuncia y la lucha, incluidas las acciones radicales, han sido su medios habituales. Podríamos bien decir que durante los últimos 25 años el movimiento se ha movido constantemente a caballo entre estas dos tesituras. Hagamos un breve repaso de los hitos más significativos.

La desaparición del dictador Franco en noviembre de 1975 dio paso a una primera época de vacío de poder y de legislación en la materia, en la que el movimiento social por el euskara conoció un gran auge. En 1977 se recogieron 150.000 firmas en favor de la oficialidad del euskara, avaladas además por 711 asociaciones vascas, y se realizó la primera edición del Kilometroak, cita anual organizada por las ikastolas gipuzcoanas, que después se extendería al resto de territorios vascos (Araba Euskaraz, Ibilaldia, Nafarroa Oinez y Herri Urrats). Al año siguiente, en 1978, tras publicar el Libro Blanco del Euskara,

Euskaltzaindia lanzó la campaña “Bai euskarari”, movilizando durante varios meses a decenas de miles de personas en actos multitudinarios. Esta campaña dejó su testigo a la Korrika bianual organizada por AEK (AEK, 1997).

El Estatuto de Gernika (1979) y el Amejoramiento del Fuero Navarro (1982) darán paso a una segunda etapa en la que se publican la Ley del Uso del Euskara (1982) y la Ley Foral del Euskara (1986) y los nuevos gobiernos autonómicos y sus diputaciones se dotan de una política lingüística, de servicios de traducción y gabinetes técnicos. En Iparralde, en cambio, no se producen cambios significativos en este momento y habrá que esperar hasta 1990 para asistir a la formación del organismo semi-público Euskal Kultur Erakundea (EKE), que tratará de responder a las demandas del movimiento euskaltzale (Oronoz, 1995).

A partir de aquí se abre una tercera fase de una década larga, caracterizada por el enfrentamiento abierto de una buena parte del movimiento social en favor del euskara con las instituciones políticas de ambos lados de los Pirineos. Este desencuentro político tendrá consecuencias varias. De una parte, la búsqueda de coordinación e integración de los diferentes grupos, entidades y organizaciones da lugar a iniciativas locales, zonales o comarcales, provinciales y nacionales. En 1983, de la mano de Euskal Herrian Euskaraz, AEK, UEU, Argia, Jakin y un elenco de grupos locales, surge EKB, Euskal Kulturaren Batzarra. En Navarra y en Iparralde se formarán, además de EKB, las coordinadoras Oinarriak y Deiadar, lo que dará lugar a ciertos solapamientos y desacuerdos. De otra, en este período tiene lugar una importante polémica y disputa entre AEK y HABE por la competencia —movimental/institucional— en la aplicación de la política de euskaldunización de adultos. Algunos euskaltegis optarán entonces por autonomizarse frente a las dos vías y más tarde —aunque hacia dentro— vendrán las escisiones de AEK en Bizkaia (Bertan) y Alava y Navarra (IKA) por discrepancias de índole organizativa.

Hacen entonces aparición reflexiones teóricas como la apuntada por Jose M^a Sánchez Carrión (1987) en su obra “Un futuro para nuestro pasado”, que tratan de dar respuesta al sentimiento de desánimo y atomización, resultado de la incomunicación y enfrentamiento sectario entre partidos y opciones ideológicas distintas. La propuesta de Sánchez Carrión se resume en la necesidad de que lo euskaldun adquiriera una formulación pre-política independiente, anterior a divisiones ideológicas; dar unidad a esa conciencia nacional euskaldun sería una condición necesaria para la supervivencia del euskara.

Pero aún en esa dinámica de enfrentamiento, que para algunos anunciaba una peligrosa periferización y ghetización del movimiento social por el euskara, ha sido posible una cierta riqueza y diversidad que se ha traducido en propuestas páticas más allá de las reivindicaciones políticas. En un constante tira y afloja se han gestado iniciativas aglutinantes como el “Euskararen Unibertsoa” y, mucho más recientemente, en 1999, ha

iniciado su andadura Euskararen Kontseilu Soziala. Kontseilua ha coseguido integrar en su seno a todas las organizaciones que luchan por el euskara y, además, ha puesto en marcha una política de movilización, planificación y participación en la que se han comprometido 650 empresas, entidades, instituciones y organismos populares. El 26 de Diciembre de 1999, Kontseilua organizó otro “Bai euskarari” —todo un símbolo—, congregando al 11% del total de la población vasca en cinco campos de fútbol de cinco capitales vascas.

Así, en la actualidad nos encontramos en una nueva y esperanzadora etapa, caracterizada por un amplio acuerdo nacional de las organizaciones sociales del euskara que ha activado a sectores empresariales, económicos y políticos, y por la existencia de un grado alto de colaboración, al menos en la Comunidad Autónoma Vasca, entre el movimiento social del euskara y la Administración. En Navarra e Iparralde la realidad político-social es mucho más adversa, como lo certifica la reciente decisión del Gobierno navarro de deshabilitar la cooficialidad de esta lengua en algunas zonas del territorio. No han desaparecido, por lo tanto, las razones para impulsar nuevas estrategias y movilizaciones. El movimiento social por el euskara sigue advirtiéndolo hoy que, aún a pesar de contar con más escuelas, más medios pedagógicos y de comunicación y más gente favorable a su aprendizaje y difusión que nunca, la situación diglósica del euskara no solamente no ha desaparecido sino que se mantiene y en ciertos aspectos avanza incluso.

El movimiento de mujeres

Al igual que en la práctica totalidad de países occidentales, en los años setenta asistimos al resurgir del feminismo como nuevo movimiento social en Euskal Herria. Ahora bien, con sus características propias. Como bien señala Joyce Gelb (1992), no existe un único feminismo sino movimientos feministas adaptados a la historia, cultura y a la vida política de cada país. Esta autora distingue, por ejemplo, entre el modelo sueco o de igualdad a través del Estado, el británico o ideológico de izquierdas, y el liberal norteamericano o de grupos de intereses. En Euskal Herria, como veremos, el feminismo no escapará a la idiosincrasia de la sociedad vasca en la que nace y se desarrolla, conformándose como un movimiento feminista reivindicativo y poco institucionalizado, al menos en su primera fase. El mito matriarcal dará paso a una lucha antipatriarcal que ha llegado a nuestros días.

Es difícil encontrar lazos de unión históricos entre el nuevo feminismo vasco que nace en los años setenta en torno a las Asambleas de Mujeres y la organización nacionalista Emakumeen Abertzale Batza fundada por Eli Gallastegi (PNV) en 1922. Esta última, siguiendo el ejemplo nacionalista irlandés, tenía como objetivo garantizar la supervivencia del euskera y de la nación vasca, y llegó a tener hasta 38.500 mujeres afiliadas en 1936, lo que sin duda le da el título de organización femenina vasca más numerosa de toda la historia de Euskal Herria.

El nacimiento del movimiento feminista vasco al final del franquismo se produce en un contexto de notable incorporación de mujeres vascas al trabajo fuera del hogar, fundamentalmente en el sector terciario (sanidad, enseñanza, limpieza, administración y oficinas, comercio, banca,...). Ello produjo un “cambio de mentalidad en las propias mujeres, de la mano de una mayor cultura e independencia económica, por el peso de la doble jornada laboral y de una cierta liberalización en las costumbres y modos sociales más allá de la voluntad del propio régimen franquista” (Asambleas de Mujeres de Euskadi y Aizan, 1986:257).

Como se pone de manifiesto en las Primeras Jornadas Feministas de Euskadi de Leioa (1977), las mujeres estudiantes y trabajadoras que se incorporan al final de la dictadura a los movimientos obrero y nacionalista vascos se topan con que detrás de la defensa de la igualdad jurídica y política para las mujeres se esconde el machismo y el puritanismo de siempre, que el patriarcado no es algo consustancial al capitalismo, que las organizaciones nacionalistas y de izquierda también comparten la misma concepción machista del mundo. Así, comienzan a nacer grupos de mujeres pueblo a pueblo, barrio a barrio, que se coordinan en las Asambleas de Mujeres de Bizkaia, Gipuzkoa, Alava y Navarra. Estos grupos ponen de relieve que “lo personal es político”, que el patriarcado marca la sociedad de arriba a abajo, que la familia es la institución fundamental de la opresión femenina y que existe una sexualidad femenina sojuzgada. En suma, abordan una primera fase de descubrimiento del mundo exterior ajeno a las mujeres y elaboran una crítica total, rotunda y radical de la sociedad, la izquierda, la militancia, la política, etc., con el objetivo último de afirmar y expresar la dimensión oculta y silenciada de su género.

Es precisamente esta toma de conciencia la que moldeará un movimiento feminista de carácter anticapitalista y anticlerical, unitario y de base, asambleario y autónomo, con presencia de muchas dobles militantes de partidos y sindicatos de izquierda y de otros colectivos y movimientos sociales (antinucleares, internacionalistas, antimilitaristas,...). Un movimiento enérgico. En 1979, la campaña “amnistía para las mujeres” y en favor del aborto, con ocasión del juicio a 11 mujeres de Basauri por prácticas abortivas, recibió el apoyo masivo de la sociedad vasca al movimiento feminista; las connotaciones antirrepresivas, en un momento clave de la transición política, sin duda colaboraron a ello. Y a mediados de los 80, las segundas Jornadas Feministas de Leioa (1984) son reflejo de un movimiento feminista reivindicativo y emprendedor que trata de conquistar ciertas parcelas de la realidad social, como son el mundo del trabajo y de la educación, donde los estrechos moldes de lo masculino y lo femenino se traducen en discriminación y opresión para el “segundo sexo”.

No obstante, ya desde las primeras Jornadas de Leioa se dejan entrever una serie de tendencias en lid, que en la posterior década se traducirán en escisiones, reagrupamientos y

organizaciones separadas del tronco central del feminismo vasco, las Asambleas de Mujeres. Con todo, son precisamente algunas de aquellas Asambleas de Mujeres (Bizkaia, Alava, Donostia, Navarra,...) las que han sabido conservar aquel asamblearismo, unidad organizativa y pluralidad ideológica hasta la actualidad.

Las grandes divisiones del feminismo vasco van más allá de la distinción entre *feminismo de la igualdad* y *feminismo de la diferencia*, aunque esta división esté meridianamente presente. Desde un principio emerge un feminismo independiente (feminismo autónomo), que critica el, a su entender, “dirigismo intruso” de los partidos de izquierda (feminismo marxista) y que dará lugar a grupos como Lambroa y a las Asambleas de Mujeres Independientes de partidos. Por otro lado, frente a un feminismo activista y reivindicativo, campañístico, proyectado hacia el exterior y hacia el poder político, muy al uso en aquel momento de cambio político que vivía la sociedad vasca a finales de los 70, se alza un feminismo de reflexión, proyectado hacia el interior, hacia el estudio, la discusión teórica, la profundización y autoconciencia. En cuarto lugar, pero no menos importante que los anteriores por sus consecuencias organizativas y discursivas, está la cuestión nacional vasca y, de manera específica, la violencia política como factores que trazan líneas divisorias en el seno del feminismo vasco. Además de un feminismo noviolento y universalista nos encontramos a grupos como Aizan! (actualmente Egizan!), que se enfrentan a la triple opresión (mujer, nacional y de clase), integrándose en el marco organizativo de KAS dentro del MNLV. Y tampoco faltarán otro tipo de agrupaciones feministas basadas en otros aspectos diferenciales como los colectivos de lesbianas, de mujeres jóvenes o internacionalistas.

Violencia y noviolencia serán en los años 80 dos estrategias que, al igual que en otros movimientos sociales, marcan un profundo desencuentro en el seno del feminismo vasco. Si bien algunas mujeres consideran que, como grupo oprimido, es perfectamente legítimo valerse de la violencia como forma de lucha, otras entienden que los métodos de lucha violentos imposibilitan la consecución de un mundo noviolento, distinto al patriarcal. Obviamente, el feminismo vasco no consigue eludir debate que atraviesa de norte a sur y de este a oeste todo el entramado socio-político vasco.

Es precisamente en esta década de los 80 cuando se crean la mayoría de los grupos que hoy pueblan este universo feminista. Muchos se desgajan de las Asambleas de Mujeres (Aizan!, Lanbroa, Independientes de Donostia, Colectivos de Lesbianas...) pero también surgen grupos al margen como el Forum María de Maeztu o el Agora Feminista. La búsqueda de homogeneidad, coherencia y un discurso propio preside esta diversificación.

La aparición del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde en la Comunidad Autónoma Vasca, a finales de los años 80, será un nuevo foco de tensiones y desencuentros. En un

principio, tanto las Asambleas de Mujeres como Aizan! desaprobaron su nacimiento y criticaron su falta de legitimidad de este organismo para intervenir en campos de actuación del movimiento feminista vasco. Por el contrario, como no nacía con un marcado carácter partidista a diferencia del Instituto de la Mujer español, otros grupos como el Forum María de Maeztu o la Asociación Clara Campoamor decidieron impulsar su creación. El hecho de que esta divergencia y debate en torno a la formulación de Emakunde, al reformismo o institucionalización del feminismo, se vivieran de manera más agudizada en Euskal Herria que en otras zonas del Estado estaría relacionado con la especial situación de tensión socio-política que caracteriza a nuestro país.

Con todo, las cosas han ido evolucionando y, al día de hoy, solamente Egizan mantiene un discurso de claro enfrentamiento con Emakunde por el efecto perverso que supone, a su juicio, asumir que vivimos en un estado de igualdad entre sexos. El resto del movimiento feminista vasco, con mayores o menores simpatías hacia el Instituto Vasco de la Mujer, ha conseguido establecer unas relaciones más o menos satisfactorias y de reparto de tareas con esta institución, quien además suele sufragar parte de los gastos de la actividad de esos grupos. Podríamos hablar, en este sentido, de una creciente institucionalización del movimiento en un marco de diversidad organizativa.

En 1994, las Terceras Jornadas Feministas de Euskadi intentaron una mirada retrospectiva, debatiendo los importantes cambios habidos en la situación de las mujeres y en el propio movimiento feminista, así como los nuevos temas y las nuevas encrucijadas (Coordinadora de Organizaciones Feministas de Euskadi, 1996). Tras dos décadas de andadura, el plural feminismo vasco reconoce sus diferencias y trata de mejorar sus relaciones, a sabiendas de que, a pesar de la aparente igualdad jurídica y legal, queda mucho camino que andar para que las mujeres puedan sentirse libres e iguales, en el trabajo o en la universidad, en casa o en la calle. Y convienen en que sólo la participación social y política de las mujeres en las instituciones sociales y políticas vascas hará posible que desaparezcan las violaciones y agresiones, las discriminaciones laborales y económicas, las dobles jornadas o la homofobia.

Existen, empero, prácticas y formas alternativas de relacionarse con el poder político. Grupos como Lanbroa o Plazandreok no ven con malos ojos la creación de un partido político feminista vasco; de hecho se han presentado a las elecciones municipales en Donostia en un par de ocasiones. Otras organizaciones presionan a los partidos políticos con representación parlamentaria para que asuman cuotas de representatividad en sus listas y garanticen la presencia de mujeres en cargos públicos, una situación que ha avanzado notable pero insuficientemente desde 1977; en las cámaras de Iruña y Gasteiz hay, respectivamente, un 28% y un 29% de mujeres parlamentarias (Elizondo,1995). Otras organizaciones, por fin, siguen haciendo de la lucha antipatriarcal, la construcción de una

identidad de género y la denuncia de agresiones y opresión en general su línea central de trabajo.

Así, el feminismo vasco de los años 90 es un feminismo de mil caras que lucha en una sociedad donde la igualdad y no discriminación entre los sexos parece haberse conseguido. El acceso generalizado a la educación y, aunque en menor medida, al mercado de trabajo, o cosas aparentemente tan banales como poder salir por la noche, son cambios sociales que parecen avalar el triunfo del feminismo en las sociedades industriales avanzadas en general y en la sociedad vasca en particular; esta evolución estaría pendiente en otros pueblos y sociedades, sobre todo en el Sur. Negando esta visión idílica y falseada de la realidad de las mujeres vascas, el movimiento feminista de Euskal Herria trata hoy de dar respuesta a tareas urgentes referidas a muy diversas condiciones sociales (jóvenes, trabajadoras, extranjeras, prostitutas, paradas, separadas o amas de casa), y lo hacen desde la convicción de que los otros movimientos sociales alternativos y las personas que luchan contra el patriarcado en el seno de partidos y sindicatos o, simplemente, en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, son sus mejores aliados.

El movimiento antinuclear y ecologista

El nacimiento del medioambientalismo en los años 70 en Euskal Herria no vino apadrinado por asociaciones de ciencias naturales como en otros países europeos —grupos como el navarro ANAN (1971), promovido por profesionales de la biología, son una excepción—, sino que sus progenitores provenían del movimiento vecinal antifranquista. Fue en aquel entorno donde se inició el debate y se organizaron unas movilizaciones que muchas veces asociaban la demanda de unas mejores unas condiciones de vida para la clase trabajadora (Gas en Erandio, Dow Chemical en Leioa, Sefanitro en Barakaldo,...) a cuestiones como la energía nuclear (Lemóniz, Ea-Ispaster, Deba, Tudela) y la defensa de los espacios naturales (Belagoa, Gorbea, Urdaibai, Txingudi,...).

El discurso público de los Comités Antinucleares en sus inicios es abiertamente anticapitalista; de hecho rehusan utilizar el vocablo “ecologista” porque desconfían de las opciones conservacionistas o menos politizadas que no se posicionan firmemente contra la energía nuclear. Además de poner en tela de juicio la aplicación civil de la tecnología nuclear, cuestionan el modelo de sociedad que la energía nuclear conlleva y adoptan formas asamblearias, antiburocráticas y autónomas (Bárcena, Ibarra y Zubiaga, 1995).

La movilización contra la central nuclear de Lemóniz es, sin duda, el mayor hito en la historia de este movimiento. En un momento histórico de transición política, de desprestigio de las viejas instituciones franquistas y de escasa implantación de las nuevas autonómicas, el proyecto de la central de Lemóniz fue un banco de prueba para todos los actores en lid.

Tras el accidente de Harrisburg (1979), el movimiento antinuclear adoptó la consigna “Euskadi o Lemóniz”, maximizando la contradicción entre los planes nucleares franquistas y el deseo de autodeterminación de los vascos, y entroncando así con la fuerte dinámica movilizadora de la comunidad nacionalista. Los Comités Antinucleares afirmaban que seguir con la construcción de la central nuclear era sinónimo de denegar al pueblo vasco su capacidad de decisión y de autogobierno (Eguzki, 1987:28).

Lo cierto es que las recién estrenadas autoridades autonómicas eran favorables a la central nuclear, pero contaban todavía con un poder limitado y simbólico y en 1980 llegaron a prometer un referéndum sobre el proyecto Lemóniz en Euskadi, que nunca se llegó a llevar a cabo. El proyecto fue abandonado en 1982 por el recién elegido gobierno del PSOE —de los 6 reactores nucleares proyectados por el gobierno de Madrid para ser instalados en Euskal Herria, ni siquiera se puso en funcionamiento el único que fue realmente construido— tras una larga, intensa y masiva campaña de desobediencia civil (conferencias, asambleas y reuniones públicas, manifestaciones y concentraciones, marchas y acampadas, sentadas y encierros,...), numerosas acciones de sabotaje sobre la Administración y la empresa constructora (Iberduero), y algunas acciones armadas de ETA. El incipiente movimiento ecologista vasco fue así bautizado con las aguas del triunfo, un triunfo cultural, político, procedimental y, además, sustantivo: Euskal Herria no cuenta hoy con central nuclear alguna (Zubiaga,1995:137).

No obstante, aquel éxito tuvo un regusto amargo de puertas adentro. Su gran heterogeneidad, la ausencia de un programa de acción común más allá del objetivo concreto de Lemoiz, la dispersión y debilidad organizativa y las crecientes diferencias ideológicas y metodológicas acrecentaron las divisiones y distancias en este período. Los paralelos con la campaña Anti-OTAN (1982-1986) son evidentes; al fin y al cabo, ecologistas y antimilitaristas provenían de un mismo tronco común: los Comites Antinucleares y Ecologistas.

En 1987, bastante menguados por los abandonos anteriores, estos Comités propusieron la creación de una “organización paraguas” que albergara en su seno al máximo posible de personas y grupos comprometidos con la lucha ecologista, lo que, en su opinión, significaba entroncar con del movimiento de liberación nacional de Euskal Herria (Bárcena, Ibarra y Zubiaga, 1995:39-47). El nuevo organismo, Eguzki, duró poco como proyecto común de confluencia ecologista y se partió en dos mitades tras 14 meses de actividad unitaria; esta participación dió lugar a EKI. Así las cosas, a finales de los años 80, el panorama ecologista vasco incluye dos grupos de ámbito nacional (Eki y Eguzki), varios de órbita provincial (Coordinadora de Bizkaia, Anat-Lane, Federación Alavesa,...) y muchos grupos locales normalmente dedicados a tareas medioambientales y prácticas conservacionistas en su

entorno más próximo (Taller Ecología de Gernika, Amilutz, Mendia Bizirik, Izadi, Zumaia, Txingudi, Hagin, Asamblea Ecologista de Tierra Estella, Txomin Bedarra, Ingurune,...).

El conflicto de la Autovía de Leizaran, con su punto álgido en los años 90-92, se convierte en la segunda gran movilización del ecologismo vasco; las claves de su desarrollo delatan que el tiempo no ha pasado en vano. En un principio, cuando se conoce el proyecto de una autovía entre Irurzun (Navarra) y Andoain (Gipuzkoa), el movimiento ecologista compone de nuevo una organización unitaria, la Coordinadora Anti-Autovía en defensa del valle de Leizaran; estamos en 1985. Pero cuatro años más tarde, ese primer discurso antidesarrollista de negativa absoluta a la nueva vía de comunicación —Autobiarik ez— da paso a la elaboración de un proyecto de itinerario alternativo —Lurralde—, que oferta una visión ecológica y científico-técnica de cómo mejorar las vías de comunicación por carretera entre Gipuzkoa y Navarra sin sacrificar el valle, para finalmente exigir la apertura de un diálogo que fructifique en un cambio de trazado.

La estructura de oportunidad política había cambiado significativamente en relación a la que existía cuando Lemoiz y ello se dejó notar. En Leizaran el movimiento ecologista no dispuso de redes sociales tan amplias como diez años antes. La autovía no era ya competencia de un lejano y ajeno Gobierno central sino de unas administraciones vascas con años de experiencia de gobierno y con un alto grado de institucionalización: podían y querían ejecutar el proyecto. Además, eran tiempos de vigencia del Pacto de Ajuria-Enea (1988), una alianza que descartaba de entrada cualquier demanda extrainstitucional en la que participara el MLNV.

Esta exclusión dejó al movimiento ecologista vasco con un sistema de alianzas construido casi exclusivamente en torno al MLNV. Y las acciones de ETA nada más comenzar las obras terminaron por relegar el debate ecologista a un segundo plano. El conflicto de la Autovía Irurzun-Andoain dejó de ser un problema ecológico para leerse en clave de enfrentamiento político entre el nacionalismo moderado y los defensores del orden autonómico establecido por la Constitución Española por un lado y los defensores de la autodeterminación y la superación de ese marco político por otro. El eje discursivo pasó de lo ambiental a lo estrictamente político-democrático.

El balance de la campaña contra la Autovía de Leizaran tuvo un sabor agri dulce para el movimiento ecologista vasco. El movimiento había mejorado sus estructuras organizativas, sus estrategias de comunicación, había sido capaz de convocar movilizaciones multitudinarias y hasta de producir una alternativa técnica al trazado viario, pero no pudo asegurar verdaderos impactos sustantivos: aún cambiando de ruta y afectando en menor grado al valle de Leizaran, la obra se llevó a cabo finalmente. El resultado final estuvo

determinado por las relaciones de poder entre los dos bloques políticos y no por la capacidad de convocatoria o por las razones del movimiento.

La construcción del pantano de Itoiz recoge el testigo de la movilización ecologista en Euskal Herria. Esta vez, el planteamiento tiene un tono más localista y se distancia del enfrentamiento entre bloques políticos. La Coordinadora de Itoiz, que agrupa a vecinos, concejales y ecologistas de la zona navarra afectada, se constituyó en 1985 para “la defensa de su tierra”, de su comunidad.

Con todo, los gobiernos autonómico navarro y central de Madrid no han reconocido a la Coordinadora de Itoiz como interlocutor y se han negado a cualquier tipo de contacto, diálogo o concesión. Esto ha empujado a la Coordinadora a complementar sus labores de información y movilización social con una serie de procesos administrativos y judiciales, en Navarra, en Madrid y en Bruselas, para impedir la construcción del pantano. Acudir a los tribunales se convertía en el último recurso para parar los pies a un poder institucional omnipotente que ignoraba las demandas del movimiento (Barcena, 2000).

En Septiembre de 1995, la Audiencia Nacional dicta una sentencia que declara nulo e ilegal el pantano de Itoiz por violar la legislación medio-ambiental, por carecer de cobertura legal —ley específica o planificación hidrológica— que lo ampare, y por la inexistencia de justificación económica suficiente. En Enero de 1996, de nuevo la Audiencia Nacional prohíbe la inundación, deforestación y movimientos de tierras por encima de la cota 506, lo que supone no poder almacenar más de 9 Hm^3 de agua, o sea el 2% del proyecto inicial.

Estas sentencias son ignoradas por los responsables del proyecto y la obra sigue adelante. Así las cosas, el día 6 de Abril de 1996 el grupo “Solidari@s con Itoiz”, en una acción se sabotaje no violento, corta los cables de las torres que suministraban el material de construcción a la presa del pantano y consigue paralizar las obras del embalse durante cerca de un año y provocar una intensa polémica política y social. Este grupo, formado en el año 1995, había decidido “pasar a la acción directa y denunciar, mediante acciones pacíficas y públicas, la irracionalidad e ilegalidad de esta obra”. Además del mencionado sabotaje, desde 1999 ha realizado acciones de denuncia ante el Parlamento europeo de Estrasburgo, el Millenium Dome de Londres, el Tribunal de la Haya, la Puerta de Brandeburgo de Berlín, la Basílica de San Pedro en Roma y la II Conferencia Mundial del Agua de La Haya.

Esta estrategia de internacionalización corrobora la ausencia de espacios de negociación tanto en Navarra como en Madrid. De hecho, la sentencia de 14 de Marzo del 2000 del Tribunal Constitucional ratificando la sobrevenida ley del Protección de Zonas Naturales que anulaba la protección de las áreas inundables y dando luz verde al Gobierno de Navarra para superar la cota de prohibición de la Audiencia Nacional, ha bloqueado la demanda

jurídica en España y ha obligado al movimiento a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Barcena, 2001).

No hemos hecho por ahora ningún comentario sobre el movimiento ecologista en Iparralde. Sus luchas más conocidas han sido la de Gas-Pars contra el oleoducto de Lacq a Navarra, las campañas contra urbanizaciones turísticas, puertos deportivos, proyectos de golfs y autovías y la movilización contra el TGV. Por lo general, las organizaciones y movimientos ecologistas de Iparralde han tenido poca o ninguna relación con el movimiento ecologista de Hegoalde. En Agosto de 1990, varios grupos ecologistas (Ortzadar, Pays Basque Ecologie, Ideal, ...) decidieron establecer mecanismos de coordinación y trabajo conjunto para compartir información, mejorar la eficacia y promover estilos comunes y confianza mutua. Este paso ha dado lugar al nacimiento del “Collectif de Associations de Défense de l'Environnement” (CADE), un colectivo que agrupa al ecologismo social en Iparralde. Además, una diferencia importante del marco político y del ambientalismo en Iparralde es la aparición también en 1990 de Euskal Herriko Berdeak. EHB obtenía así autonomía en el marco de la federación francesa “Les Verts”. EHB ha llegado a tener un diputado en el Consejo Regional de Aquitania en Burdeos y una decena de concejales en los municipios de Iparralde.

En Hegoalde, sin embargo, una buena parte del movimiento ecologista no ha considerado oportuno sumarse a los proyectos de partidos verdes; la existencia de diferentes opciones políticas en el ámbito de la izquierda vasca cierran el espacio a este tipo de proyectos. Por otro lado, las más importantes y conocidas redes y organizaciones ecologistas internacionales (Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, BirdLife,...) también han tenido una limitada o escasa relevancia y presencia en Euskal Herria. Ello confirmaría el protagonismo de los grupos tradicionales del ecologismo vasco.

Por ejemplo, Greenpeace, aunque con sus cerca de 6.000 socios es la organización con más afiliados en Hegoalde, y a pesar de que ha realizado diversas campañas en el suelo y la costa vasca —contra la importación de polvos de acería, en favor de la pesca tradicional, Itoiz e Incineradoras...—, no posee ninguna oficina permanente y sólo muy recientemente socios de esta organización han empezado a reunirse para organizar campañas locales (Itoiz, instalaciones de energía eléctrica, Incineradora de Bilbao,..) o dar espacio a sus campañas globales (alimentos transgénicos,...), la mayoría de las veces en colaboración con grupos del movimiento ecologista vasco. En el caso de WWF y Amigos de la Tierra, su presencia pública local es prácticamente nula.

El movimiento ecologista vasco intenta responder a las mismas claves del movimiento ecologista europeo pero inmerso en un contexto de alta polarización política. El movimiento ecologista ha sido habitualmente definido como el nuevo movimiento social que ha venido a

enfrentarse a las grandes transformaciones que el industrialismo y los procesos de modernización han producido en la naturaleza y el medio ambiente. En Euskal Herria este movimiento de respuesta a las nuevas dinámicas del desarrollo económico, tecnológico e infraestructural comenzó su andadura enfrentándose a los planes de nuclearización diseñados en la dictadura franquista y ha ido ampliando su espectro de acción medioambiental en un contexto político cambiante.

Normalmente, el antagonista de sus protestas medioambientales es la Administración Pública; entre 1987-1998 el 71,8% de esas protestas se realizaron ante instituciones administrativas. Las grandes infraestructuras son el eje central de un conflicto permanente con las autoridades locales, provinciales, autonómicas o estatales, como reflejan en la actualidad los conflictos ambientales abiertos en Itoiz, en torno al TAV, los parques eólicos, la incineradora de Bilbao y el resto de proyectos energéticos (Boroa, Bahía Bizkaia, IGCC-Petronor, Castejón...), los proyectos de puertos deportivos e industriales o la planta de tratamiento de lindano en Barakaldo. Así, desde sus inicios hasta hoy, nos encontramos con un ecologismo a la contra, de rechazo y enfrentamiento a los planes de desarrollo impulsados por el sistema político-económico, lo que ha generado una cultura política de conflicto ambiental que enfrenta de forma manifiesta los valores institucionales (crecimiento, competitividad, nueva imagen, cambio tecnológico y democracia representativa) con los defendidos por el movimiento ecologista vasco (sostenibilidad, equidad, salud, producción limpia, y democracia participativa). El siguiente gráfico representa esta cultura política de conflicto (Bárcena, 1998).

Gráfico 2. Ingurugiroaren kultura politiko gatazkatsua

Esta tensión ha hecho que instituciones y empresas hayan adoptado un cierto discurso y práctica medioambiental. Esta relativa institucionalización de las políticas medioambientales ha roto el anterior monopolio que sobre lo ecológico tenían las organizaciones ecologistas. En este nuevo contexto, el movimiento ecologista vasco ha optado por la flexibilidad y el pragmatismo para mejorar su influencia, y lo ha hecho reforzando sus infraestructuras, estabilizando sus recursos humanos, procurándose recursos mediáticos y aprovechando las oportunidades que ofrecen los procedimientos legales y judiciales. Ello no se ha traducido en una relación distinta con las instituciones sino más bien en otras estructuras y modos de movilización.

Y es ahí donde pensamos que el movimiento ecologista vasco “ha hecho de la necesidad, virtud”. Hoy en día, el movimiento consigue alimentar dinámicas movilizadoras y condicionar y cuestionar proyectos, no tanto por una “buena movilización de recursos propios” sino porque ha sabido ganarse buenos aliados y ocupar espacios mediáticos. El movimiento está consiguiendo aparecer y ser visto ante la opinión pública y ante sus

simpatizantes políticos como defensor de la razón y del bien común, frente al hermetismo y la cerrazón institucional, con un discurso ecológico que combina ingredientes nacionalistas, localistas y antidesarrollistas.

El movimiento por la paz y antimilitarista

Al igual que los movimientos anteriores, la expresión “movimiento por la paz” podría considerarse una especie de cajón de sastre que reúne una gran diversidad de grupos. Unos se oponen a todas las guerras y militan contra todas las manifestaciones de violencia y militarismo (grupos antimilitaristas como el Euskal Herriko Kontzientzi Eragozpen Mugimendua y militantes de carácter y compromiso cristiano, normalmente diluidos en otros grupos); otros, más o menos cercanos a los anteriores, centran su actividad en un capítulo concreto de ese militarismo (Euskadiko Kontzientzi Eragozleen Elkartea o grupos locales de insumisión en relación con la conscripción u obligación del servicio militar, Eragozpen Fiskalaren Asanbladak con el gasto militar, Gasteizkoak en relación a la producción y comercio de armamento, Médicos contra la Guerra Nuclear,...); otros comparten muchas cosas con los anteriores pero no se declaran noviolentos (Kakitzat, beste intsumiso talde batzuk, Malatxa,...); otros, en fin, denuncian una guerra en particular (Amigos del Pueblo Saharai, SOS Balcanes, Plataforma de Chiapas,...); y, obviamente, distintas combinaciones de todos los anteriores se estructuran ocasionalmente en campañas y coordinadoras ad hoc (Mobida Anti-OTAN, Asamblea Anti-Polígono de las Bardenas, Coordinadora contra la Guerra del Golfo,...). Además, están los grupos hoy llamados pacifistas y cuyo contenido central en el conflicto vasco (Gesto por la Paz, Elkarri, Bakea Orain,...).

Esta diversidad refleja, en realidad, los mismos ejes de enfrentamiento ideológico y político que hemos visto en los casos de los movimientos feminista y ecologista: el nacional por un lado, expresado habitualmente en la justificación o no de la violencia como instrumento político, y el del pacifismo liberal/pacifismo radical, que pone de un lado a quienes creen en la posibilidad de reformar las estructuras institucionales actuales y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos, y del otro a los partidarios de una ruptura o eliminación de estructuras para facilitar el nacimiento de nuevas formas sociales y políticas.

También, como en los otros dos movimientos mencionados, retroceder en el tiempo es encontrar el tronco común de muchos de los grupos que pueblan este universo pacifista y antimilitarista. Un somero análisis de los principios que encarna el hoy decano de los grupos pacifistas y antimilitaristas vascos, Kontzientzi Eragozpen Mugimendua, es una buena presentación de aquel pasado común: pacifismo radical, noviolencia, asamblearismo, compromiso colectivo por un cambio político profundo. Este grupo se formó en 1974 a partir de objetores de objeción de conciencia, militantes de la noviolencia, militantes

cristianos y algunos anarquistas, y desde entonces viene trabajando la educación para la paz, la acción directa no violenta —incluso el sabotaje: los solidari@s con Itoiz se entrenaron para su acción con decanos militantes de este grupo—, la investigación sobre el gasto militar y la producción y el comercio de armamentos, la denuncia de las guerras y la violencia estructural, del patriarcado, el militarismo y los ejércitos, etc. En cualquier caso, su campo de trabajo más conocido es la objeción de conciencia y la insumisión, una movilización que se ha desarrollado, sin solución de continuidad, desde entonces hasta el día de hoy y que por su actualidad repasaremos más adelante.

Entre las grandes campañas del movimiento pacifista y antimilitarista vasco merece destacarse la movilización en contra de la permanencia del Estado español en la OTAN. Esta movilización dominó la agenda político-social de la primera mitad de los años 80. En Diciembre de 1979, la OTAN adoptó la decisión de desplegar en Alemania Federal, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Holanda los famosos euromisiles (Pershing II y Cruise) en respuesta al despliegue en los países de Europa del Este de misiles de alcance intermedio soviéticos (SS-20). Ello produjo la eclosión en toda Europa Occidental de unos de los movimientos sociales más potentes y activos recordados desde la 2ª Guerra Mundial, en términos de capacidad de convocatoria, impacto y coordinación internacional. El movimiento por la paz de Euskal Herria se solidarizó con sus iguales en Europa realizando protestas contra las bases americanas y participó activamente en los foros creados a tal efecto, como por ejemplo la END o European Nuclear Disarmament. En aquel contexto, concretamente en Mayo de 1982, el último gobierno de la UCD, con Calvo Sotelo a la cabeza, decidió la entrada de España en la OTAN, abriendo así un espacio propio para la movilización pacifista.

Una sociedad vasca contraria al proyecto Lemóniz como proyecto nuclear civil impuesto por las autoridades de Madrid no podía sino ser contraria a una entrada en la OTAN que suponía el fin de la neutralidad y extendía a nuestras tierras la amenaza nuclear militar que se vivía en Europa, y que, de nuevo además, había sido decidida en Madrid. Que los vascos y vascas eran y son mayoritariamente favorables a la salida de la OTAN es algo que quedó patente en el referéndum de Marzo de 1986: emitió su voto un 63,7% del censo y entre los votantes hubo un 62,6% de noés y un 33,5% de síes. Sin embargo, el dinámico, amplio e imaginativo movimiento pacifista y antimilitarista vasco no fué capaz de alcanzar el nivel de movilización y de convocatoria que habían tenido las manifestaciones en contra de Lemoiz. Cuatro razones podrían aducirse para ello. Una, que la percepción de una posible agresión nuclear era mucho más difusa y lejana que la inmediatez de una central nuclear en propio suelo. Dos, que la votación estaba cantada: las encuestas reflejaban que cerca del 80% de la población estaba en contra; movilizarse era innecesario, al menos en lo que tocaba a Euskal Herria. Tres, que la estructura de oportunidad política era menos favorable: el Partido

Nacionalista Vasco, con una dirección claramente pro-atlantista, pero constreñido por lo que era una opinión mayoritaria, optó por pedir la abstención en el referéndum.

Y cuatro, el movimiento anti-OTAN vasco estuvo dividido en tres bloques: la Mobida Anti-OTAN de Euskadi, de carácter plural y asambleario, promovida por los Comites Antinucleares y Ecologistas y por un largo número de grupos y colectivos antimilitaristas, los Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, que contaban con el apoyo de Euskadiko Ezkerra, el Partido Comunista de Euskadi y Comisiones Obreras, y el Manifiesto por la Soberanía Nacional de Euskadi y contra la OTAN, promovido por la Mesa Nacional de Herri Batasuna. En el resto del Estado, la división se produjo entre los dos primeros bloques.

Con un pasado común, muchos activistas en ambas redes y un historial de campañas compartidas como el cierre de las instalaciones militares en territorio vasco (Jaizkibel, Belagua, Bardeak,...), no fue difícil la organización de una campaña conjunta entre grupos antimilitaristas y grupos antinucleares y ecologistas: la Mobida Anti-OTAN de Euskadi. Inaugurada en el otoño de 1983, los grupos que la componían intentaron mediaciones y marcos unitarios amplios que fructificaran en una plataforma común y unitaria en contra de la OTAN. Sin embargo, las perspectivas de un supuesto rendimiento electoral para los partidos que participaban en los otros dos bloques y también diferentes sensibilidades dentro de la Mobida sobre cuáles eran las alianzas prioritarias, hicieron inviable ese espacio común.

Por un lado, los dirigentes de HB prefirieron otro terreno de juego con un discurso diferenciado, de prioridad nacional y criticado de pro-soviético. Por otro, Euskadiko Ezkerra, el Partido Comunista de Euskadi y CCOO se aliaron con los Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, un organismo pacifista centrado en la defensa de la no violencia y el rechazo a ETA, en la búsqueda de un espacio reformista que tuviera una mejor acogida en los medios de comunicación y, en general, en el marco institucional. Poco después nacería en este espacio la iniciativa Gesto por la Paz.

A pesar de los buenos resultados en Hegoalde, el movimiento por la paz no pudo ganar el referéndum en el conjunto del Estado Español —los resultados más favorables en Hegoalde, Catalunya y Canarias permitirían una cierta lectura diferencial nacionalista o de desajuste entre centro y periferia—, y ello supuso una desmovilización de una buena parte del mismo.

Algunos años más tarde, cuando se produjo la intervención militar en el Golfo Pérsico, el movimiento pacifista y antimilitarista vasco fue capaz de reconstruir alianzas pasadas y organizó una rápida y contundente respuesta. Esta movilización bien podría considerarse una reedición de la movilización anti-OTAN, ya que era una intervención como las de

siempre: imperialista, motivada por intereses económicos, comandada por Estados Unidos y, además, el gobierno español cometió la torpeza de enviar soldados forzosos en pleno desarrollo de la insumisión. Sin embargo, la guerra de los Balcanes concitó mucha menos acción, callaron los grandes sindicatos y partidos políticos que habían participado en la campaña de la OTAN o en la crisis del Golfo. Este conflicto produjo una seria crisis en el seno del movimiento, incluso, aunque en menos medida, en sus grupos más tradicionales y con un mayor bagaje analítico. Tan sólo algunos de sus militantes entraron a formar parte, a título individual, de iniciativas de solidaridad y denuncia al respecto como SOS-Balkanes o Gerrarik Ez!. Ello hizo posible que estas iniciativas, aunque mucho menos potentes, pudieran integrar a una mayor diversidad ideológica que las anteriores y propiciar un estilo distinto (Ajangiz, 2000).

La objeción de conciencia y la insumisión es la otra gran movilización que ha ocupado al movimiento pacifista y antimilitarista vasco. Mucho más longeva que la campaña anti-OTAN, su impacto ha sido también mayor: la deslegitimación e inoperatividad de la prestación sustitutoria en una primera instancia, el gran crecimiento de la objeción de conciencia a renglón seguido y la abolición del servicio militar obligatorio como punto final. En ningún otro país se ha organizado nunca una campaña de estas dimensiones, radicalidad y resultados. Es, sin lugar a dudas, una experiencia singular.

La movilización comenzó en los años 70 en demanda de una ley reguladora de la objeción de conciencia, pero cuando finalmente en 1984, el Gobierno del PSOE sancionó esta posibilidad, el movimiento anunció una desobediencia civil al servicio militar obligatorio que comenzó a hacerse realidad en 1988. El liderazgo de esta desobediencia civil, tanto en términos ideológicos como estratégicos, ha recaído en todo momento en el Kontzientzi Eragozpen Mugimendua, cuyo ideario propugna la supremacía de la acción directa no violenta para propiciar la abolición de los ejércitos y del militarismo y asegurar una sociedad verdaderamente igualitaria. Los otros grupos son Kakitzat, AOC-EKEA y Malatxa. Kakitzat, organizador del “Intsumiso Eguna” anual y ligado a grupos de la izquierda extraparlamentaria, se coordina habitualmente con KEM; AOC-EKEA, una asociación de asesoramiento y defensa generalista de los objetores, no se opone a la insumisión y no ha propiciando la creación de puestos de prestación sustitutoria como lo ha hecho su homónimo en Catalunya; y Malatxa, la creación del MLNV en respuesta al liderazgo de KEM y Kakitzat, nunca ha conseguido trascender su propio mundo. Además, podrían incluirse hasta cierto punto las organizaciones políticas juveniles que han apoyado la lucha por la insumisión (Jarrai, EGI, Eusko Gazteriak, Hautsi,...). Obviamente, la formulación de este ámbito del antimilitarismo en Iparralde ha sido distinta (Arteaga, 1998).

La insumisión se puso en marcha en 1989 con un número ciertamente reducido de desobedientes, unos 300 aquel primer año. Diez años más tarde, sumaban unos veinte mil.

Con todo, esta cifra sólo representa el 1% de los llamados a filas y un 3% del total de objetores de conciencia habidos en ese periodo. Existe por tanto una diferencia importante en relación a otras movilizaciones del movimiento pacifista: su fuerza no radica en la capacidad de convocatoria sino en los medios e instrumentos utilizados. La coyuntura también ha sido importante: la insumisión se adelantó a la puesta en marcha de la prestación sustitutoria, condicionando seriamente su posterior desarrollo; bloquear el normal funcionamiento de la prestación sustitutoria ha sido lo que al final ha disparado las cifras de objeción de conciencia e imposibilitado matemáticamente la continuidad del servicio militar obligatorio. Además, introdujo en las agendas política y mediática una demanda de abolición del servicio militar que el Gobierno no quería ni podía estructuralmente resolver. De hecho, la mayoría de los partidos vascos y españoles han cambiado sus posiciones al respecto desde el inicio de la insumisión.

Pero la clave ha sido, sin duda, su formulación como una desobediencia civil de carácter no violento. El movimiento ha hecho de la represión y la cárcel el eje de su protagonismo. La legitimidad social de su objetivo y la utilización de medios exquisitamente no violentos ha operado como un revulsivo político en contra del Gobierno represor. De hecho, fue el Gobierno quien puso todos los medios a su alcance para que los insumisos no fueran encarcelados. Cuando parecía que lo había conseguido, el planteo o renuncia al tercer grado penitenciario por parte de los insumisos devolvió la centralidad al conflicto; la concentración de insumisos en la cárcel de Iruñea se convirtió en una denuncia del sistema penitenciario. Y la inhabilitación tampoco consiguió resolver el escándalo social que esa represión provocaba. Al final, la persistencia del conflicto ha impedido reformas parciales que salvaran el servicio militar obligatorio.

Tirando de la solidaridad antirrepresiva, el movimiento consiguió que un amplio sector político y social presionara para eliminar la mili. Su iniciativa del “Manifiesto por la Abolición del Servicio Militar” funcionó de hecho como una especie de pacto político entre movimiento y partidos políticos que le permitió hacerse oír en el ámbito institucional, por ejemplo los parlamentos vasco, español y europeo. Además, propició la negativa de las instituciones vascas en la implementación del sistema de prestación sustitutoria y del propio reclutamiento militar; recordemos por ejemplo las polémicas declaraciones institucionales de los ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián o la creación de Eudima, una institución precursora del actual planteamiento soberanista de Udalbiltza. A diferencia de movilizaciones ecologistas como Lurralde o de anteriores movilizaciones del propio movimiento pacifista y antimilitarista, la gran virtud de la insumisión es que contaba con el apoyo de todas las fuerzas políticas vascas. Obviamente, ha sido de gran ayuda que la política militar en general y la mili en particular fuesen competencias exclusivas del Gobierno central. Pero también es cierto que, en un contexto dominado por el Pacto de

Ajuria, esa unanimidad ha sido posible porque el protagonismo y liderazgo ha recaído en el movimiento, quien en todo momento ha sabido preservar su independencia. La insumisión no habría tenido ni con mucho la misma relevancia si, por ejemplo, hubiera estado dominada por el MLNV. De ahí que las organizaciones más propias del movimiento se hayan visto obligadas a jugar en tierra de nadie, a buscar alianzas en uno y otro lado, a reunir consensos imposibles. Gracias a ello, la insumisión ha sido un espacio común para todos los vascos.

Gráfica3. Proceso de la abolición de la conscripción en el Estado español.

Al final, sobrevino la crisis definitiva del servicio militar. El modelo de Fuerzas Armadas 2000 que habían pactado socialistas y populares en 1991 se reveló insuficiente en 1994. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, calificó la situación de “problema de Estado” e intentó enmendar esa progresión con un plan especial de prestación sustitutoria. Pero era demasiado tarde. Dos años después, el nuevo gobierno del PP anunciaba el fin de la mili obligatoria y se apresuraba a reclutar soldados de empleo para componer un ejército suficiente. Las tremendas dificultades de esta transición, en comparación con la vecina Francia, donde la supresión de la mili ha sido el último paso de una transformación de años que ha convertido a este país en la primera potencia militar europea, son la prueba fehaciente de que ha sido el movimiento y no el Gobierno quien ha decidido e implementado el fin de la conscripción (Ajangiz, 2001).

Es muy importante el papel que ha jugado el movimiento antimilitarista vasco en esta movilización, cualitativa y cuantitativamente. Los grupos vascos tuvieron un papel protagonista en el diseño estratégico de la campaña y la decisión final de iniciar esta desobediencia civil se adoptó en Orío en agosto de 1988. Los insumisos vascos han supuesto bastante más de la mitad del total de insumisos habidos en el Estado español y la mayoría de las mediaciones de que se ha servido el movimiento en el conjunto del Estado corresponden a instituciones y actores políticos de Euskal Herria (Agirre Aranburu, Ajangiz, Ibarra *et al.*, 1998). En definitiva, podría decirse que el movimiento antimilitarista vasco es el máximo responsable de la abolición de la conscripción que se ha visto obligado a adoptar el Gobierno español, que tal abolición no habría sido posible sin su participación.

Otra manifestación del movimiento por la paz en Euskal Herria son las movilizaciones contra la violencia política que caracteriza al conflicto vasco. Su origen hace referencia a dos bloques diferenciados dentro del movimiento por la paz de Euskal Herria y ello se refleja en dos formas de entender la violencia política. Los primeros se oponen a la utilización de la violencia con fines políticos, denunciando su ilegitimidad ética y política y exigiendo la aceptación de las reglas democráticas y el uso de medios pacíficos para la

resolución de los conflictos políticos y los segundos consideran que, dada la fractura y el largo enfrentamiento político-social que vive Euskal Herria, el diálogo y la negociación entre todas las partes debe primar sobre el rechazo de la violencia.

Gesto por la Paz nace en Bilbao en 1985 como una concentración silenciosa de protesta por cada muerte que resulta de la violencia política. Sus formas organizativas y sus gentes son las típicas del movimiento pacifista. Es una coordinadora que reúne a más de 100 grupos locales, en muchos casos ligados a la Iglesia. Sin embargo, debe su popularidad y posiblemente su rápida extensión al resto del País Vasco al apoyo mediático e institucional que recibió cuando en 1988 expresó públicamente su apoyo al Pacto de Ajuria Enea. Desde entonces ha intentado compatibilizar la elaboración y oferta de reflexiones para el diálogo y la resolución del conflicto con la notable presencia de líderes políticos del ámbito institucional en sus convocatorias de movilización. Ello ha tensionado su evolución y estructuración interna. Por ejemplo, Bakea Orain y Denon Artean se desgajaron de Gesto por la Paz en desacuerdo con su funcionamiento político y organizativo, buscando un mayor acercamiento a las instituciones y un discurso más agresivo frente a ETA y al MVLN.

En 1992 nació Elkarri buscando un protagonismo técnico, de mediador e impulsor del diálogo y el acuerdo para salir de esta larga situación de enfrentamiento. Es una organización atípica, porque se mueve a caballo entre la consultoría especialista en resolución de conflictos y el movimiento social; de hecho, cuenta con una amplia militancia y potencia que cada uno de sus miembros se convierta en activistas sociales de la mediación y el diálogo. Su éxito más palpable es, posiblemente, la facilitación del acuerdo de Lizarragarazi.

En cualquier caso, el valor de la Coordinadora Gesto por la Paz, de Elkarri y, en general, de los grupos del movimiento pacifista en su sentido más extenso es ocupar lugares intermedios entre los polos del conflicto y ofrecer oportunidades de diálogo y acuerdo. Grupos como Senideak o Gestoras Pro-Amnistia, Gernika Batzordea, Orereta Bake Taldea, Herria 2000 Eliza o la Asociación Pro Derechos Humanos, participaron junto a Elkarri o Gesto por la Paz en una ronda de conversaciones entre grupos pacifistas para ir abriendo camino a un diálogo más amplio. Pero, sin duda, la relación más significativa se ha desarrollado entre estos dos últimos. Gesto por la Paz y Elkarri llevan años buscando el encuentro y afinando propuestas conjuntas, hallando equilibrios imperfectos. Por ejemplo, la llamada de atención sobre la dispersión de los presos vascos o sobre la reparación de las víctimas del conflicto como un paso imprescindible para cicatrizar las heridas. Y lógicamente, ese trato, el paso del tiempo y el fracaso del proceso iniciado tras la tregua de ETA han reducido las diferencias de enfoque de ambos colectivos. Quizá por esta razón, en un contexto de creciente polarización inducida, los polos más extremos en el conflicto vasco han animado la creación de colectivos menos independientes, por ejemplo Euskal Herria

Askatu! en el dominio del MLNV y Foro de Ermua y Basta Ya! del lado del llamado bloque constitucionalista.

Para concluir este apartado, decir que criterios clásicos como la instrumentalidad, capacidad de convocatoria, unidad formal, o acción antigubernamental sirven cada vez menos para valorar los modos e impactos del movimiento pacifista y antimilitarista. Este movimiento responde hoy a parámetros más propios e identitarios: (a) ha ido reemplazando aquella cultura de la movilización —organización permanente mínima pensada para activar una movilización extensa cuando la coyuntura fuese favorable— por una cultura de movimiento —organización en red extensa con trabajo permanente en distintas áreas—; (b) prefiere marcarse su propia agenda en torno a contenidos proactivos de largo alcance —la educación para la paz, el fin de la conscripción, la conversión de la producción de armamento, los conflictos bélicos, la paz en Euskal Herria— que activarse en reacción a la agenda gubernamental; y (c) ha ganado una notable autonomía e independencia en relación con los partidos políticos. En este sentido, el movimiento pacifista y antimilitarista vasco es mucho más maduro que muchos homónimos europeos.

Movimiento de solidaridad

Desde los años setenta se ha desarrollado en Euskal Herria multitud de campañas de solidaridad internacional (Centroamérica y especialmente la Nicaragua sandinista, Sahara, Sudáfrica, Irak, Palestina, ...) pero sobre todo en el espacio de los últimos quince años, el Estado español en general y Euskal Herria en particular ha conocido una enorme expansión del sector definido como Organizaciones No Gubernamentales. Dada su gran variedad interna, es problemático calificar este sector en su conjunto como movimiento social, pero, sin lugar a dudas, existen bastantes organizaciones en su seno que se estructuran y actúan en clave de movimiento social. Cáritas de Euskal Herria podría ser un ejemplo. Pero el más evidente son las llamadas ONG de Desarrollo.

Sus antecedentes remotos pueden encontrarse en la actividad misionera de la Iglesia, cuyas organizaciones —la misma Cáritas— tienen todavía un gran peso en el sector. Pero, sobre todo a partir de los setenta, guerras como las de Vietnam y conflictos como los de América Latina contribuyeron definitivamente a conformar una nueva sensibilidad en torno a la solidaridad internacional que redundó en una progresiva secularización de la ayuda al desarrollo. La creación de brigadas de trabajo y de comités de solidaridad se tradujo en los años ochenta en la formación de un buen número de ONGDs vascas (Hirugarren Mundua eta Bakea, Mugarik Gabe, Fondo Vasco de Cooperación, Hegoa,...), que vinieron a sumarse a las grandes organizaciones de ámbito estatal que por aquel entonces habitaban este universo (Cruz Roja, Cáritas, Médicus Mundi, Manos Unidas,...). Después, en los años noventa, hemos asistido a una cierta especulación del sector: la convocatoria de ayudas

gubernamentales para proyectos de cooperación y desarrollo —la primera convocatoria del Gobierno Vasco tuvo lugar en 1988— ha animado la creación de muchísimas más organizaciones, la mayoría de ámbito local.

En la actualidad existen un total de 231 ONGDs en Euskal Herria, incluyendo delegaciones de organizaciones de ámbito estatal e internacional. La práctica totalidad (un 90%) desarrolla proyectos de cooperación para el desarrollo con fuentes de financiación básicamente públicas y dos terceras partes envía cooperantes a terceros países. Estamos pues ante un sector muy estructurado o institucionalizado. Sin embargo, es un sector que no ha perdido su identidad movimental: voluntarios y cooperantes constituyen el 95% de sus estructuras, la sensibilización de la población ocupa al 98% de las organizaciones, dos terceras partes participan en redes y grupos de presión (Murguialday, Río, Anitua *et al.*, 2000) y la mitad se identifica a sí misma como formando parte de un movimiento social. Pero lo que mejor define este carácter de movimiento social son las campañas y movilizaciones de denuncia que cíclicamente organizan.

La primera gran campaña de las ONGDs fue la campaña del 0,7%. Iniciada en 1981 por Justicia y Paz, empieza a implementarse por las ONGs de ámbito cristiano de Euskal Herria en 1984 y cuatro años más tarde se convierte en la primera e intensa movilización de la recién creada Coordinadora de ONGs del País Vasco para el Desarrollo del Tercer Mundo. La Coordinadora recoge más de 45.000 firmas y emplaza a las instituciones vascas a que dediquen a proyectos de cooperación el 0,7% de sus presupuestos. A diferencia del resto del Estado, la campaña dio resultados. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Gasteiz asume ese principio y el Parlamento Vasco aprueba una sustanciosa partida para proyectos de cooperación. Además, a partir del año siguiente, las Coordinadora llega a participar en la definición de los criterios de concesión de esas ayudas.

Con todo, la relación entre la Coordinadora y las instituciones siempre ha estado marcada por una cierta tensión. Por un lado, con un presupuesto que depende prácticamente en su totalidad de fondos públicos, estas organizaciones están aparentemente condenadas a entrar en relaciones de clientela con los poderes públicos y aceptar un reparto de cuotas en la concesión de subvenciones y firma de convenios que se rige por afinidades partidistas. Por otro, los gobiernos suelen interpretar los proyectos de cooperación como una parte de su política de relaciones exteriores, de su balanza comercial. Sin ir muy lejos, Hirugarren Mundua eta Bakea fue excluida del reparto del Gobierno Vasco durante cinco años por liderar una campaña en favor de la transparencia en la gestión de los fondos para desarrollo.

Este tipo de conducta institucional, común a todo el Estado, hizo que en 1994 se relanzara de nuevo la campaña del 0,7%. La Coordinadora exigía entonces que la ayuda se rigiese por los siguientes criterios: (a) lucha contra la pobreza y sus causas estructurales, (b)

deconexión de los intereses comerciales, (c) democracia, participación y respeto de los derechos humanos, del papel de la mujer y del desarrollo sostenible; (d) descentralización y (e) sensibilización de la opinión pública. A resulta de aquella campaña se inició en 1998 la actual movilización por la condonación de la deuda externa, “deuda externa, ¿deuda eterna?”.

Esta mayor firmeza del movimiento de solidaridad ha venido acompañada de dos estrategias para mejorar su autonomía y capacidad de influencia. Una, diversificar las fuentes de financiación, por ejemplo acudiendo a la Unión Europea. Y la segunda, reforzar el papel representativo de la Coordinadora, que es ahora quien exige transparencia en los criterios de concesión de programas y en la evaluación y control de los fondos otorgados, apoyándose circunstancialmente en denuncias formales contra los responsables administrativos de esa concesión. Esta estrategia está dando sus resultados y ha forzado, a partir de 1999, una mayor objetividad del proceso. La Coordinadora de nuevo participa en el mismo.

Podemos hablar, por tanto, de una repolitización o intensificación del carácter movimental de este sector. La última ha sido la aprobación por parte de la Coordinadora de un código de conducta que compromete a sus organizaciones integrantes a trabajar para erradicar la pobreza, entender la cooperación como un intercambio entre iguales, partir siempre de iniciativas en el país receptor para fomentar la construcción de tejido social, crear canales de participación ciudadana e instituir mecanismos formales que aseguren la transparencia, honestidad e independencia de su labor. Además, está progresivamente haciendo uso de un discurso explícitamente pacifista y antiarmamentista. En la actualidad esta coordinadora se está planteando una campaña de denuncia de los gastos militares y del comercio de armamento bajo el título de “dividendo de paz”. Los vínculos con el movimiento pacifista, del que provienen bastantes de los activistas de la solidaridad, son evidentes. En realidad, podríamos muy bien decir que el movimiento de solidaridad se nutre habitualmente de activistas de los otros movimientos sociales antes mencionados.

Reflexión final: Sobre los cambios impulsados por los nuevos movimientos sociales en Euskal Herria.

Los nuevos movimientos sociales han irrumpido con una nueva forma de “hacer” política en los sistemas políticos de las sociedades industriales avanzadas. Compitiendo con los grupos de interés y partidos políticos tradicionales, a veces transformándose incluso en nuevos partidos o alternativas electorales (verdes, feministas, listas alternativas,...), los nuevos movimientos sociales han conseguido que sus temáticas y agendas hayan pasado a un primer plano en la arena político-institucional. Otra cuestión diferente, y más complicada de evaluar, es hasta qué punto han tenido éxito en su aventura o, dicho de otra manera,

cuánto han llegado a calar en la sociedad vasca las propuestas de cambio impulsadas por los nuevos movimientos sociales.

En el caso concreto de Euskal Herria, algunos de esos impactos son visibles: el fracaso de las políticas de nuclearización del suelo vasco, la presencia constante de las cuestiones de género en las agendas política y mediática, o la abolición del servicio militar obligatorio. Otros son más difíciles de observar: cambios de valores y actitudes, procesos de capacitación social y política, nuevas formas de acción colectiva, nuevos discursos y formas de pensar, etc. Como vemos en el cuadro adjunto, son muchos los impactos o consecuencias que pueden derivarse de la acción de los movimientos. Además, su comprobación y medición no siempre resulta sencilla; todo lo contrario, demostrar causalidad o una relación causa-efecto entre la acción del movimiento y los fenómenos que observamos después es harto complicado y exige embarcarse en investigaciones que cuenten con un buen diseño metodológico. A falta de investigaciones así, podemos, eso sí, intentar explicaciones de base hipotética y, sobre todo, compartirlas. Reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos colectivos no sólo es saludable, es una verdadera necesidad para seguir avanzando. Animamos al lector a que coja un movimiento o movilización concreta, repase este listado bolígrafo en mano y discuta sus hallazgos con amigos y compañeros de activismo.

A modo de esbozo, y en primer lugar, podemos afirmar que en los últimos 25 años en Euskal Herria se han producido altos niveles de protesta y movilización social, muy superiores a la media de las sociedades que nos circundan. Si además tenemos en cuenta el notable grado de asociacionismo y de organización social para la defensa de intereses varios y la extensión de valores alternativos a la formulación institucional de la política, bien podríamos concluir que la sociedad vasca es una sociedad en movimiento, incluso una sociedad de movimientos sociales (Meyer y Tarrow, 1998).

Este fenómeno de organización popular que ha ocurrido en todas las sociedades de Occidente, ha tenido en Euskal Herria un desarrollo aún más espectacular si cabe, generando una sociedad civil plural y dinámica, en constante polémica con las instituciones políticas, desde lo local a lo global, y con una mayor presencia relativa de valores igualitarios y libertarios de la izquierda alternativa. Este hecho puede perfectamente relacionarse con la existencia de un contexto estructural política, económica y culturalmente apropiado para la emergencia de nuevas formas de acción colectiva, que resulta del entrecruzamiento de dos importantes tensiones, la tensión centro-periferia y la tensión materialismo-postmaterialismo.

En primer lugar, las expectativas de cambio social y político que frustró la reforma política española y la persistencia de una cultura de resistencia, antirrepresiva y de solidaridad, reforzada por las redes sociales de la izquierda radical y nacionalista, han sido

un abono natural para el desarrollo del discurso, los valores y las estructuras organizativas de los nuevos movimientos sociales. Y en segundo lugar, el pluripartidismo y la inestabilidad gubernativa que ha caracterizado al sistema político vasco-navarro durante estas dos últimas décadas, con una alta polarización que divide al electorado entre nacionalistas y centralistas por un lado y entre izquierdas y derechas por otro, ha cerrado y desacreditado ante las nuevas generaciones las formas de participación política tradicionales, en especial la democracia representativa.

Este contexto, favorable a la adopción de formas alternativas de participación política, las más de las veces en oposición a los partidos y las instituciones de gobierno que definen el terreno tradicional de juego político, ha motivado una movilización insistente y cíclica de los nuevos movimientos sociales vascos, que se caracteriza por dinámicas y organizaciones de corte asambleario, horizontales y participativas. Esta alternatividad, impregnada por un cierto tinte anti-institucionalista, no es otra cosa que una propuesta coherente de democracia participativa.

En casi 30 años de movilización cultural, social y política, los nuevos movimientos sociales vascos han tejido extensas redes organizativas, han generado discursos y conocimiento, han acumulado experiencia sobre los medios de acción y han aprendido a manejarse en las arenas política y mediática; la espectacularidad e innovación de las acciones no son sino un recurso para ello. Las ideas de la recuperación lingüística, el respeto a la naturaleza, la igualdad entre los sexos, el rechazo al militarismo o la paz nutren un ideario compartido y las transferencias de activistas, formas y propuestas entre movimientos son un hecho común. Algo más complicado es constatar cambios de conducta y de los códigos normativos, sociales y legales que reflejen esos nuevos valores —llamados post-materiales— que aportan el feminismo, el antimilitarismo, el pacifismo, el ecologismo o el movimiento de solidaridad. Aunque se han desarrollado algunas prácticas nuevas y se han promulgado nuevas leyes atendiendo a estas demandas sociales, el camino por recorrer todavía es largo.

Es indudable, sin embargo, la consolidación de estos nuevos movimientos sociales como nuevos actores en nuestra geografía política y social. Han escrito algunas páginas de la historia de este país, pero no sólo, hoy sería impensable una Euskal Herria sin su presencia. Además, a pesar de los altibajos y crisis, desaveniencias y reagrupamientos ya comentados, o precisamente gracias a ellos, los nuevos movimientos sociales muestran una envidiable madurez; son treinta años de experiencia. Su legado está ahí. Además de la producción cultural y del entramado organizativo, se atisban ciertos cambios que apuntan a lo que Sztompka llama procesos redistributivos. En algunos campos como el medioambiental, han hecho posible un estado permanente de información y consulta; en otros, como la

solidaridad con otros pueblos, parece avanzarse tímidamente hacia otro modelo de relaciones internacionales.

La mayor responsividad o rendición de cuentas de las administraciones públicas es otro logro importante. Gobiernos y partidos políticos, de derechas e izquierdas, han tenido que responder a las nuevas agendas que se han construido a partir del conflicto creado por los nuevos movimientos sociales, que es en sí otra manera de hacer política, eso que se ha dado en llamar *contentious politics*. Las administraciones han tenido que dotarse de departamentos “ad hoc” (Medio Ambiente, Euskara, Mujer, etc.) para implementar esas nuevas políticas públicas y también para convencer al electorado y a la opinión pública de su compromiso público para con los problemas y cuestiones que han sacado a la luz los movimientos sociales. Con todo, existen todavía pocos espacios de consulta y participación ciudadana y las prácticas de codecisión y cogestión son muy excepcionales. Quizá por esta razón, los movimientos sociales siguen recurriendo con asiduidad a protestas y movilizaciones.

Quizá también por esta misma razón o bien porque las organizaciones de los movimientos sociales son muy celosas de su independencia, la progresiva asunción institucional del discurso y de la agenda temática de los nuevos movimientos sociales no se ha traducido en una co-optación de sus activistas ni en una integración o institucionalización de las organizaciones en sentido sistémico. O por lo menos lo ha hecho mucho menos que en otros lares. Los nuevos movimientos sociales vascos son, en este comienzo de milenio, muy distintos de lo que fueron en el tardofranquismo, han evolucionado mucho. Por ejemplo, sus organizaciones son ahora autónomas, no están “tuteladas” como entonces

por los partidos de la izquierda nacionalista y radical, al menos aquellas que no están directamente integradas en la “familia de movimientos” del MLNV. Por otro lado, se autofinancian en su mayor parte, lo que les libera de relaciones clientelares con las instituciones. Su incipiente institucionalización parece tener que ver, sobre todo, con el reconocimiento de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las instituciones como interlocutores válidos.

Por último, podemos muy bien concluir que los nuevos movimientos sociales vascos han supuesto un acicate en la extensión de los valores democráticos en la sociedad vasca; su cultura participativa y sus prácticas de desobediencia civil han servido para reforzar la cultura del diálogo, de la soberanía popular, de la tolerancia y el respeto a las minorías que hacen posible la profundización de la democracia. En un país como el nuestro donde la demanda de autodeterminación personal y colectiva está tan presente, la existencia de una tupida red de movimientos sociales supone un interesante capital social y político que

permite pensar el futuro con mucha más esperanza que la que nos ofrece este tozudo acontecer cotidiano.

Leioa, Junio del 2001